

THE OBJECTIVE

DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2024



La voracidad legislativa asfixia al comercio: se aprueban 1.140 normas cada año / P. 50



Entrevista a Carlos Rodríguez Braun: «Cuando un político critica a Ortega suele desaparecer» / P. 55



El 60% de las películas de los Goya ingresó más en ayudas que en taquilla / P. 75

El 'caso Koldo' cerca a Ábalos y salpica a Armengol y al ministro Ángel Víctor Torres / P. 1



- José Luis Ábalos y Koldo García: los contratos sanitarios, las juergas y su estrecha amistad / P. 22
- El Gobierno admite por primera vez que obligó a llevar mascarilla en pandemia sin tener un aval técnico / P. 36
- Yolanda Díaz ha modificado 23 veces por la puerta de atrás la reforma laboral pactada con la UE / P. 42



El PSOE culpa a Marlaska por su gestión en Barbate: «Nos desangró en Galicia» / P. 11



La misión imposible contra el narco: el 40% de los agentes 'dimite' cada año por hartazgo / P. 17

elSubjetivo

El repudio del héroe

/ P. 80

FERNANDO SAVATER



La disolución del PSOE

/ P. 86

ANTONIO CAÑO



El insoportable silencio de los militantes

/ P. 90

FRANCESC DE CARRERAS



El fracaso de un PSOE destituyente

/ P. 96

DAVID MEJÍA



'Caso Ábalos': ahora toca que se haga justicia

/ P. 100

ÁLVARO NIETO



Sánchez miente cuando dice que la deuda está bajando

/ P. 104

IGNACIO RUIZ-JARABO



Malas noticias desde Galicia

/ P. 109

MANUEL ARIAS MALDONADO



Mascarillas, caos y chorizos

/ P. 113

JAVIER BENEGAS



ESTA EDICIÓN HA SIDO PATROCINADA POR:

ferrovial

MÁS INFORMACIÓN: WWW.THEOBJECTIVE.COM

Tribunales

El 'caso Koldo' cerca a Ábalos y salpica a Armengol y al ministro de Política Territorial

Con ellos como presidentes de Baleares y Canarias, sus gobiernos concedieron a dedo varios contratos investigados



Ilustración de Alejandra Svriz.



Alberto Sierra

@albsierr

asa@theobjective.com

🕒 Publicado: 22/02/2024

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil por la que se ha detenido a Koldo García, quien fuese la mano derecha de José Luis Ábalos, no solo cerca al exministro y actual diputado del PSOE. Los contratos de mascarillas por importe de más de 53 millones de euros en los que se centra la investigación, adjudicados a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, también salpican a dos figuras de peso

que forman parte del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Grupo Parlamentario Socialista. Se trata del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Con Torres y Armengol como presidentes autonómicos de Canarias y Baleares, respectivamente, se concedieron a dedo varios contratos de mascarillas, por importe de 15,8 millones de euros, a la empresa que se convirtió en el proveedor favorito de mascarillas del exministro Ábalos durante el inicio de la pandemia, pese a no tener actividad alguna ni experiencia previa en el sector sanitario antes de la covid-19. La misma empresa recibió otras tres adjudicaciones de los ministerios de Transportes e Interior por importe de 40,5 millones de euros en 2020, de los cuales casi 37 millones fueron pagados por el departamento dirigido entonces por Ábalos.

Según fuentes del caso consultadas por THE OBJECTIVE, las adjudicaciones a esa empresa por parte de Canarias y Baleares, bajo la presidencia autonómica de los socialistas Torres y Armengol, se encuentran entre los contratos por los que han sido detenidas en distintos puntos de España 20 personas por el presunto cobro

de comisiones ilegales. Entre los arrestados se encuentran Koldo García, su esposa, uno de sus hermanos y dos empresarios presuntamente vinculados a Ábalos y su mano derecha: Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol, y José Ángel Escorial.

Adjudicaciones en Canarias

Ambos, según fuentes conocedoras de la investigación, están relacionados presuntamente con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, bajo la lupa de Anticorrupción en este presunto caso de corrupción que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El proveedor favorito de mascarillas del exministro de Transportes José Luis Ábalos recibió de Baleares un contrato de 3,7 millones de euros por el suministro de «equipamiento médico» cofinanciado con fondos de la UE y otros casi 12 millones de euros del gobierno autonómico de Canarias por el suministro de material sanitario durante la pandemia.

Tres adjudicaciones a dedo en Canarias que se encuentran bajo investigación por parte de la Fiscalía en el marco del caso Koldo y que salpican al ex alto cargo del Gobierno canario al que la trama de Tito Berni contactó en varias ocasiones para intentar hacer negocios sanitarios. Se trata de Conrado Domínguez, el exdirector del

Servicio Canario de la Salud (SCS) y el hombre al que Ángel Víctor Torres nombró como coordinador del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias durante la pandemia.

Domínguez se vio obligado a dimitir a finales de 2022 tras ser imputado por adjudicar al menos un contrato de cuatro millones de euros a una empresa de coches «para beneficiar a un amigo», según Anticorrupción, a cambio de mascarillas que nunca llegaron a ser entregadas. Un hombre, además, al que fuentes del llamado caso Tito Berni consideran una de las piezas clave en la rama sanitaria de la trama presuntamente encabezada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y que utilizó un decreto derogado para perdonar al proveedor de mascarillas de Ábalos un ‘pufo’ de 2,1 millones de euros.

Nexo con el ‘caso Tito Berni’

El departamento de salud canario dirigido por Conrado Domínguez -a quien Antonio Navarro Tacoronte (alias El Mediador) identificó como su verdadero jefe ante la juez del caso Tito Berni- se amparó en un Real Decreto-ley que había sido derogado un mes antes para justificar y ordenar, en junio de 2021, un último pago de 1,3 millones de euros al proveedor favorito de mascarillas del exministro José Luis Ábalos.

Así figura en la última modificación del expediente público, consultado por THE OBJECTIVE, por el que el Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó un contrato de 6,87 millones de euros para el suministro de 2,75 millones de mascarillas FFP2 a la compañía zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

En esa resolución, fechada el 4 de junio de 2021 y firmada por una ex alto cargo que se encuentra imputada por el caso mascarillas de Canarias, el SCS dio «validez» a «todos los actos administrativos» del contrato suscrito un año antes por Soluciones de Gestión SL y que había sido incumplido parcialmente por la empresa. La compañía zaragozana, como contó este diario, había entregado algo más de 833.700 mascarillas quirúrgicas defectuosas haciéndolas pasar por NK95/FFP2. Al detectarse el pufo, la firma zaragozana fue perdonada por el Gobierno autonómico del ahora ministro Ángel Víctor Torres a cambio de comprometerse a llevar a Canarias un nuevo envío con algo más de medio millón de mascarillas que sí cumplieran con la homologación requerida.

Precisamente ordenar el pago de 1,3 millones de euros por esas 550.000 mascarillas, que se entregaron finalmente en febrero de 2021 a un precio de 2,5 euros la unidad, era uno de los objetivos de esa resolución del 4 de junio de 2021, según consta en el portal de contrataciones del

Estado. En ese texto, el SCS se ampara en el artículo 16 del Real Decreto 7/2020, de 12 de marzo, como fundamento de derecho para justificar el último pago y dar «validez» a todas las modificaciones de ese contrato con Soluciones de Gestión SL desde su inicio.

RESUELVO

Primero.- Que todos los actos del expediente de contratación para el suministro de 2.750.000 mascarillas protectoras KN95/FFP2, adjudicado mediante tramitación de emergencia a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. (C.I.F. n.º B50760123) el 22 de abril de 2020 —modificado el 3 de noviembre de 2020—, por importe total de 6.875.000,00 euros, para la lucha frente al COVID-19, conserven su validez y produzcan todos sus efectos, desde el inicio del expediente, con excepción de los documentos contables que hayan podido quedar invalidados por la cancelación del crédito presupuestario contraído por el cierre del ejercicio presupuestario 2020.

6



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 01ccgcank4Wsp0LQSGHm0uy1B4Nv_P1v

Gobierno
de Canarias

Unión Europea

Segundo.- Se proceda a continuar con los trámites en el momento procedimental que quedaron interrumpidos en el ejercicio presupuestario 2020, una vez activada la aplicación presupuestaria 3923 312C 2200645 del presupuesto de gastos de este centro directivo para el ejercicio 2021.

Tercero.- Ordenar el pago a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. (C.I.F. n.º B50760123) de la factura n.º 20075, de 31 de diciembre de 2020, expedida por dicha empresa por el suministro de material sanitario consistente en 555.000 mascarillas FFP2, que corresponde a una parte del pedido realizado el 22 de abril de 2020 —modificado el 3 de noviembre de 2020—, adquiridas por este centro directivo con destino a surtir a los centros sanitarios dependientes del Servicio Canario de la Salud de los medios necesarios para la lucha frente al COVID-19, mediante tramitación de emergencia, por un importe total de **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (1.387.500,00 €), con tipo 0% de IGIC**, con cargo a la aplicación presupuestaria 3923 312C 2200645 (elemento PEP: 392G0040 Actuaciones urg. crisis sanit. COVID-19) del presupuesto de gastos de este centro directivo para 2021 (financiado por el Programa Operativo 2014ES16RFOP007 FEDER 2014-2020 de Canarias, dentro del Eje Prioritario EP1, Objetivo Temático OT1, Prioridad de inversión 1b, Objetivo específico OE.1.2.4 Actuaciones necesarias para reforzar las capacidades de respuesta a la crisis provocada por la COVID-19).

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS

El 'pufo' millonario en Canarias

El problema es que esa disposición legal, según subrayaba la Fiscalía anticorrupción en su querrela por el caso Mascarillas en Canarias y confirma el Boletín Oficial del Estado (BOE), había sido derogada el 5 de mayo de 2021; es decir, un mes antes de que se volviera a modificar -por quinta y última

ocasión- el contrato entre la sanidad canaria y el proveedor favorito de mascarillas de Ábalos. Al quedar derogado, a partir del 5 de mayo de 2021, las administraciones perdían no solo la potestad de usar discrecionalmente la tramitación de emergencia para cualquier contrato relacionado con la covid-19, sino que además perdían el derecho a «realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista».

El artículo derogado y el decreto en cuestión habían permitido hasta entonces que las administraciones públicas, entre marzo de 2020 y mayo de 2021, pudieran aplicar la «tramitación de emergencia» (sin publicidad ni licitación previa) a cualquier contrato para hacer frente a la covid-19. El Gobierno de Canarias, presidido entonces por el ministro Ángel Víctor Torres y bajo el auspicio del hombre al que designó para adjudicar los contratos de mascarillas en esa comunidad autónoma, ignoró la derogación que le impedía modificar los contratos públicos y ordenó el pago del último pago de los 12 millones de euros que Canarias abonó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

Artículo 16. Contratación.
(Derogado).

- Se deroga por la disposición derogatoria única. 2.a) del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo. [Ref. BOE-A-2021-7351](#)
- Se modifica por la disposición final 1 de la Ley 3/2021, de 12 de abril. [Ref. BOE-A-2021-5771](#)
- Se modifica por la disposición final 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo. [Ref. BOE-A-2020-4152](#)
- Se modifica por la disposición final 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. [Ref. BOE-A-2020-3824](#)

Última actualización, publicada el 05/05/2021, en vigor a partir del 09/05/2021.

☒ Última actualización, publicada el 05/05/2021, en vigor a partir del 09/05/2021.

☐ Modificación publicada el 13/04/2021, en vigor a partir del 13/04/2021.

☐ Modificación publicada el 28/03/2020, en vigor a partir del 28/03/2020.

☐ Modificación publicada el 18/03/2020, en vigor a partir del 18/03/2020.


☐ Texto original, publicado el 13/03/2020, en vigor a partir del 13/03/2020.

Contrato de 3,7 millones en Baleares

Con sede en Zaragoza y relacionada con este presunto caso de corrupción que cerca a Ábalos, tras la detención de su mano derecha Koldo García y de los empresarios que según fuentes policiales también tenían relación con el exministro de Transportes y con la empresa zaragozana, recibió también una adjudicación del Gobierno de Baleares presidido por Armengol. El Ejecutivo balear otorgó también a Soluciones de Gestión y Apoyo un contrato de 3,7 millones de euros por el suministro de «equipamiento médico». En concreto, 1,4 millones de mascarillas FFP2 que se pagaron a 2,5 euros cada unidad. Un contrato cofinanciado con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de las Islas Baleares, según consta en el expediente de la adjudicación.

Meses después, en un informe, la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Baleares cuestionó ese contrato a Soluciones de Gestión y señaló que el entonces administrador de la empresa, José Ángel Escorial, uno de los 20 detenidos en el caso Koldo, controlaba también varias sociedades off shore, dos de las cuales aparecían en los Paradise Papers. Una tercera mercantil vinculada al administrador único de Soluciones de Gestión habría sido investigada por la Guardia Civil y la

Audiencia Nacional por el presunto pago de sobornos en Angola para que la empresa pública Mercasa fuese adjudicataria de la construcción de un mercado de abastos en la capital de ese país africano.

 Oficina de prevención i lluita contra la corrupció a les Illes Balears

Estos importes facturados por INJOO TECHNOLOGY SL ascienden a un total de 6.120.730,55 €

En las alegaciones se han aportado cinco informes justificativos de 5 pedidos. La Oficina ha analizado los cuadros presentados en fase de alegaciones y éstos contienen datos erróneos. Es por ello que no se toman en consideración las alegaciones presentadas para este proveedor.

3.4.1.5. SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A EMPRESAS SL

También se trata de una sociedad con NIF español (B50760123), y con domicilio Social en Avenida Cesar Augusto, 44 - 3 1, Zaragoza, 50004

- Su objeto Social es la gestión de proyectos.
- Actividad CNAE: 7022 - Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
- Cargos directivos - Adm. Único: PURDEY INVESTMENT SL
- Socio único: SWALALI SOCIEDAD LIMITADA
- Apoderado: ROTAECHE LACHIONDO INIGO
- Ingresos: 2017: 5.033.292 €
2018: 101.058 €
- Nº de empleados: 4 (2018). Contaba con 29 empleados en 2014 y 11 en 2015.

Esta empresa ha contratado además con el Ministerio de Sanidad la compra de material sanitario valorado en 40,5 millones de euros.

En cuanto a su administrador único, se trata de PURDEY INVESTMENT SL, cuya información más destacable es la siguiente:

- CIF B85636199
- Antigüedad: 11 años (16/03/2009)
- Domicilio: C/ Orilla 5 - Escalera 1, Primero A Y B, 28010 - Madrid
- Sector: CONSULTORIA EMPRESARIAL Y OTROS
- Cargos directivos - Administrador Único: ESCORIAL SENANTE JOSE ANGEL¹⁸
- Ventas: entre 500.000 y 1.000.000 (2017)

¹⁸ El Sr. Escorial Senante aparece en el caso de los denominados "Paradise Papers" con dos sociedades offshore en Malta. En 2008 era administrador de "Delta Advisory and Management Services Limited", y de "Arce Investment Consulting Limited, así como de Malta Capital. De acuerdo con la información que dispone la Oficina, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigaron el pasado año a esta sociedad, sobre una posible corrupción en Angola, en concertación con otras empresas, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa española Mercasa, dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda.

C/. Alfons el Magnànim, 29, 2º-1ª.
07004 Palma de Mallorca
Tel. 871 90 50 66
info@oaib.es

52

Negocios en Angola

En Angola, según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Soluciones de Gestión desarrolla desde hace más de una década un proyecto para la construcción de un hospital. También forma parte de otra Unión Temporal de

Empresas (UTE) encargada de la construcción de una central eléctrica flotante.

El informe de la Oficina balear de Lucha contra la Corrupción cuestionaba que, si bien a raíz de la urgencia y el estado de alarma se podía comprar entonces sin expediente de contratación, por la vía de emergencia, «se deberían haber establecido algunos mecanismos de control adaptados específicamente para supervisar la contratación y la adquisición pública» durante los primeros meses de pandemia.

Tribunales

El PSOE culpa a Marlaska del 18-F por su gestión en Barbate: «Nos desangró en Galicia»

Fuentes socialistas revelan una caída al final de la campaña por la «alta sensibilidad de esta comunidad con la droga»



Fernando Grande-Marlaska.



Ketty Garat

@KettyGarat

kg@theobjective.com

🕒 Publicado: 21/02/2024

Dos puntos lejanos en el mapa pero con un común denominador: el narcotráfico. Galicia y Barbate compartieron algo más que la portada informativa de la última semana de la campaña electoral a la Xunta. Según fuentes socialistas consultadas por THE OBJECTIVE, la gestión del Gobierno del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) a manos de los

narcotraficantes, «hizo que nos desangráramos en las encuestas», impidiendo taponar la fuga de voto del PSOE al BNG en la recta final de la campaña. Esto último acabó «desfondando» el suelo del PSOE hasta su mayor fracaso histórico, con nueve escaños. Las mismas fuentes gubernamentales que niegan el impacto de la amnistía en los comicios gallegos, sí admiten que lo ocurrido en Barbate «nos ha hecho mucho daño en una comunidad muy castigada por el narco» en los años 80.

De lo que hablan las fuentes consultadas no es sólo de la «alta sensibilidad» que existe en Galicia con una actividad ilegal que impactó duramente a la sociedad gallega, por convertirse en la puerta de entrada a Europa de la droga desde Colombia: el movimiento Érguete de madres contra los capos de la droga, la implantación de una epidemia silenciosa de adictos a la cocaína y la heroína y la muerte de miles de jóvenes. Un realidad superada ampliamente por la ficción de la serie Fariña, acerca de Sito Miñanco, cuyo «recuerdo es nítido en Galicia».

De ahí la enorme indignación que se empezó a gestar cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistió a los Goya en la noche del sábado 10 de febrero, al día siguiente de que los dos agentes de la Benemérita fueran embestidos por una narcolancha, y limitó sus condolencias a un

mensaje en las redes sociales lamentando «profundamente lo ocurrido». Un sentimiento que se incrementó tras el rechazo del PSC a secundar un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Barcelona, de donde era natural uno de los agentes asesinados.



Sánchez «no debió ir a los Goya»

El Gobierno admite que el núcleo duro del presidente no se planteó siquiera asistir a la capilla ardiente en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para evitar posibles protestas. «No debería haber ido el presidente. Con Óscar Puente y el ministro de Cultura era suficiente», opinan estas fuentes, exculpando al ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, donde se celebró la Gala de los Goya, pero señalando la mala gestión del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Porque el «error» de la asistencia del presidente a los Goya, y a un desfile de moda de Devota y Lomba a los pocos días en el Ateneo de Madrid, se le sumó la «soberbia» del ministro del Interior negándose a dimitir y defendiendo haber provisionado de los medios suficientes a la Guardia Civil.

Las informaciones de este diario sobre las seis embarcaciones averiadas del servicio marítimo de la Guardia Civil, en la víspera de los ataques de los narcos, causó estragos

en diferentes sectores del PSOE, entre los que se encontraba la federación gallega: «Mandamos a dos criaturas a una muerte segura, sin medios». Y no muestran clemencia con Marlaska. Aseguran: «Mintió porque conocía perfectamente la falta de medios de la Guardia Civil». Estas fuentes aseguran que el titular de Interior se encuentra en una posición «insostenible» en el Consejo de Ministros y auguran que su permanencia en el Gobierno podría estar en cuestión: «Esta es la gota que ha colmado el vaso».

Ofensiva del PP en Congreso-Senado

Ya en la última crisis de Gobierno, «Marlaska estuvo a punto de caer, pero le salvaron las protestas de Ferraz», según el PSOE. Porque el mejor salvavidas para el ministro fue que los manifestantes pidieran su cabeza: «Basta que exijan su dimisión para que Pedro le mantenga». Por ello, otras fuentes gubernamentales creen que es «improbable» que su salida del Gobierno, vestida de una decisión «personal», suceda de forma inminente, cuando precisamente es el blanco de la ofensiva del PP en el Parlamento. Este miércoles se debate su reprobación en el Senado, mientras el ministro del Interior tendrá que responder a las preguntas de la oposición en la sesión de control del Congreso sobre la falta de medios en el servicio de vigilancia marítima del Estrecho. Una ofensiva parlamentaria que ya tuvo lugar este martes en el Senado.

A modo de aperitivo de lo que ocurrirá este miércoles en el Congreso, el ministro Marlaska respondió a los ataques del PP sobre lo ocurrido en Barbate preguntando: «¿De verdad cree que mi dolor es menor que el suyo? ¿Tan arrogante es? ¿Tan sobrados están de patriotismo?», respondió al senador popular Alejo Joaquín Miranda. «Yo no hago política con el dolor. Ustedes sí (...) El mejor homenaje a los narcos que he visto yo ha sido una giornata particolare del presidente del PP en un barco con un narco», dijo exhibiendo la foto del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narco Marcial Dorado. Aparte del ministro del Interior, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá también que pronunciarse sobre las elecciones gallegas o lo ocurrido en Barbate, tras varios días guardando silencio.

España

La misión imposible contra el narco: el 40% de los agentes 'dimite' cada año por hartazgo

El acoso de las mafias, la falta de medios y las malas condiciones hacen que los agentes no se arraiguen en el Estrecho



La Guardia Civil escoltando a un detenido por narcotráfico. | Agencias

**Enrique Recio**

@RecioEN

er@theobjective.com

🕒 Publicado: 18/02/2024

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tiene un serio problema al que hacer frente en el Campo de Gibraltar. La tragedia en el recinto portuario de Barbate con el asesinato de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha ha puesto la puntilla a la situación de desamparo institucional que padecen los agentes desde hace años.

El principal obstáculo, en cualquier caso, no solo es la falta de medios, como se ha constatado en la última semana. También lo son el acoso que sufren tanto ellos como sus familias por parte de las mafias de la droga o tener que hacer frente a jornadas de 12 horas, insuficientemente remuneradas y en las que son constantes las lesiones físicas y las agresiones. Un ‘cóctel’ perfecto que, como consecuencia, ha provocado que la mayoría de los agentes quieran marcharse de las unidades antidroga.

Trabajar en la Línea de la Concepción, Algeciras o Tarifa se ha convertido en un auténtico martirio para muchos policías y guardias civiles. Prueba de ello es que, según revelan fuentes policiales alrededor del 40% de los agentes que trabajan en el Campo de Gibraltar —unos 300 funcionarios— piden cambiar a un destino menos conflictivo cada año. Un hartazgo que también queda patente en todas las vacantes que quedan sin cubrir en cada concurso de traslados. Un escenario que convierte a la lucha contra el narcotráfico en, prácticamente, una ‘misión imposible’.

Servicio marítimo

En el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cádiz la situación es crítica. Tal como reveló este periódico, esta unidad, especialista en vigilancia e intervenciones contra el narco, no contaba con ninguna embarcación disponible cuando se produjo el arrollamiento mortal contra los guardias

civiles porque toda la flota estaba averiada. Lo que, según han denunciado las asociaciones profesionales, «llevó directamente a la muerte a los agentes, cuando se lanzaron al mar a bordo de una zódiac que apenas tuvo opciones antes las embestidas de la narcolancha».

La lista de averías que afecta a las seis patrulleras del Servicio Marítimo es de tal calibre que, una semana después de los sucesos de Barbate, esta unidad de vigilancia, encargada de velar por una extensión costera de más de 120 millas náuticas, sigue sin poder operar en el litoral gaditano. Un déficit que no se resolverá a corto plazo, según señalan las fuentes del Instituto Armado. Pueden ser días, meses o incluso años los que se tarden en volver a tener operativas las embarcaciones. Todo depende del tipo de daño que presente cada embarcación, aseguran estas fuentes.

Uso limitado

Problemas de refrigerante, en los motores o por desperfectos tras haber colisionado con narcolanchas son algunos de los inconvenientes que han provocado que estén varadas. La Río Agueda, por ejemplo, está averiada desde principios de este mes, después de que fuese embestida por una goma en la desembocadura del Río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, durante una persecución. Un operativo en el que resultó muerto el piloto de la lancha,

amigo de El Cabra, y que justificaría, según la investigación, que este último hubiese embestido mortalmente a los agentes fallecidos por un ajuste de cuentas.

«El problema es que las embarcaciones son muy antiguas y tienen continuas averías y reparaciones. Además, las de última dotación generan mucho gasto —por el coste del gasoil— a la administración y está limitado el uso de las mismas», denuncian desde la Asociación de Cabos de la Guardia Civil. En cualquier caso, Interior también está teniendo problemas a la hora de adjudicar los contratos de reparación. Errores, rectificaciones y aplazamientos han impedido resolver los que licitó en el mes de agosto, es decir, hace seis meses, según publicó este periódico.

Plazas vacantes

Por otro lado, está el problema humano. «Es el resultado de las malas condiciones de trabajo», resume un guardia civil. «Tenemos constante lesiones en la espalda y en las rodillas por los saltos producidos por la embarcación en los seguimientos a las narcolanchas; deficiencia y falta de material y personal, así como un riesgo extremo por lidiar con las mafias». «Todo eso sumado a los horarios de 12 horas de servicio y la falta de reconocimiento económico, ha provocado que se hayan ido 13 compañeros del Servicio Marítimo y, solo se hayan cubierto tres vacantes», añade.

La falta de personal, cuenta este funcionario, es además otro aliciente para que los compañeros no decidan mantenerse en esta especialidad. Es la pescadilla que se muerde la cola. Tener un equipo consolidado es, al final, lo que marca la diferencia a la hora de enfrentarse al compendio de delitos que brotan en el Campo de Gibraltar. Por este motivo, asociaciones y sindicatos policiales reclaman desde hace años declarar esta región Zona de Especial Singularidad (ZES), una figura que lleva aparejada pluses económicos y que ya existe en otras comunidades como País Vasco o Navarra. Interior dice que la estudia desde hace tres años.

Lectura

José Luis Ábalos y Koldo García: los contratos sanitarios, las juergas y su estrecha amistad

El libro 'Conexión Caracas-Moncloa', del director de THE OBJECTIVE, desvela todos los datos sobre el 'Koldogate'



Ilustración de Alejandra Svriz.



Álvaro Nieto

@alvaronieto
director@theobjective.com

🕒 Publicado: 22/02/2024

POR SU INDUDABLE INTERÉS, THE OBJECTIVE PUBLICA A CONTINUACIÓN UN EXTRACTO DEL LIBRO 'CONEXIÓN CARACAS MONCLOA', PUBLICADO POR EL DIRECTOR DE THE OBJECTIVE, ÁLVARO NIETO, EN FEBRERO DE 2022 EN LA EDITORIAL B.

Cuando José Luis Ábalos llega a la sede central del PSOE como secretario de Organización, Santos Cerdán, otro de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, le recomienda la contratación de Koldo García Izaguirre como asistente personal. Cerdán conocía a García de su Navarra natal, donde había empezado a destacar dentro del partido como chico para todo.

García, que no tiene estudios y cuyo historial laboral arrancó como portero de algunos locales turbios en Pamplona, enseguida se gana la confianza de Ábalos y este, cuando es nombrado ministro, se lo lleva como miembro de su gabinete. Pero es que además lo coloca, entre otras bicocas, como consejero de la empresa pública Renfe Mercancías, escándalo que también desvelamos cuando hicimos famoso a García al publicar que había sido el que, en su coche particular, había trasladado al ministro a Barajas la noche del 'Delcygate'.

La vida de García es un culebrón en sí misma. La noche navarra le unió a Cerdán, quien acabó fichándolo de chófer del partido. Luego le propuso ir de relleno en la lista de las elecciones municipales en la localidad de Huarte, donde terminó de concejal por una serie de rebotes. Cuando Ábalos se hizo cargo de la secretaría de Organización del PSOE, se incorporó como escolta y conductor ocasional. Y, finalmente, cuando el dirigente socialista entró en el Gobierno, se lo llevó de asesor, dentro de los

puestos de libre designación que suelen tener los ministros. A él y a su mujer, Patricia Úriz, a la que también colocaron como ayudante de secretaria en el ministerio.

Cuando estalló el ‘Delcygate’, y en respuesta a una pregunta parlamentaria, Ábalos justificó la contratación de García porque «salvó la vida de dos policías». Y algo parecido también debía de pensar sobre él Sánchez, pues el 23 de junio de 2014 le dedicó un artículo en la red social Facebook. Bajo el título «El último aizkolari socialista; un titán contra los desahucios», el presidente del Gobierno afirmaba que García es «uno de los gigantes de la militancia en tierras navarras», «un guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido, que es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha». Y terminaba así: «Un inagotable aizkolari contra las injusticias, un ejemplo para la militancia». A pesar de tantos elogios en el pasado, García también fue destituido como consejero en Renfe Mercancías en cuanto Ábalos salió del Gobierno.

Episodios truculentos

La historia de García está plagada de episodios truculentos, hasta el punto de que ha sido condenado dos veces por agresiones. La primera de ellas, en 1991, se la impuso el Juzgado de lo Penal Número 3 de Pamplona

y le acarreó una pena de dos años y cuatro meses de cárcel y la suspensión de todo cargo público por un delito de lesiones, aunque luego fue indultado en 1996 por el Gobierno del Partido Popular. Y en 2011 fue condenado por el juzgado de instrucción número 1 de Pamplona a una multa de 900 euros por haber agredido a un menor de edad que había entrado en un bar con una camiseta con la palabra «Independentzia» la noche que España ganó el mundial de fútbol. Acabaron los dos por los suelos en una pelea.

Por si eso fuera poco, García participó en una trifulca que tuvo el ministro en un pub de Mérida en febrero de 2019. Y, cómo no, también apareció en escena unos meses más tarde del ‘Delcygate’ cuando se destapó la famosa juerga de Ábalos en las islas Canarias, en noviembre de 2020. El diario ABC había destapado que, tras una serie de actos oficiales en Las Palmas y Tenerife debido a una crisis migratoria, Ábalos había pasado un fin de semana con su familia y su séquito en dos hoteles de lujo (Palacio de Isora y Santa Catalina) tras ir a visitar un viernes un centro de inmigrantes en Arguineguín. La noticia puso el acento en la doble moral del ministro, capaz de organizarse una breve visita a los inmigrantes con tal de tener una excusa para, en mitad de la pandemia y con restricciones de movilidad en toda España, poder pasar unos días de asueto.

Pero el problema de aquel viaje iba mucho más allá de la doble moral. Como destapó posteriormente mi compañero Antonio Rodríguez, García llegó a pagar en metálico y con billetes de 500 euros una factura de gastos extras de 1.800 euros que incluía un masaje para Ábalos y diversas bebidas alcohólicas, entre ellas varias botellas de champán de la marca Moët & Chandon. Según supimos más tarde, ese día era el cumpleaños de uno de sus escoltas y decidieron celebrarlo por todo lo alto.

Lo sorprendente, aparte de la juerga en sí, fue cómo en España nadie pareció escandalizarse por el asunto. Se descubre que un asesor del Ministerio de Transportes ha pagado gastos particulares del ministro con billetes de 500 euros sacados de un sobre y casi nadie se cuestiona de dónde ha salido el dinero y quién ha pagado realmente la fiesta. Ábalos, obviamente, salió al paso de las informaciones diciendo que no se había utilizado dinero público.

En respuesta a preguntas del Partido Popular, el Gobierno contestó en febrero de 2021 que el coste oficial del viaje (ministro, jefe de gabinete, dos asesores y dos escoltas) fue de 7.150 euros, al tiempo que negó que se hubiera abonado partida alguna al margen de la agenda oficial. Según Ábalos, el alojamiento de su mujer y de dos de sus hijos lo pagó de su bolsillo: 381 euros por dormir en Tenerife y 168 por el hotel en Gran Canaria. No obstante, el PP siguió preguntando en días posteriores si se habían utilizado fondos reservados en ese viaje.

La versión de Ábalos deja muchas aristas sobre lo ocurrido. Si los gastos eran particulares, ¿por qué los pagó su asesor? ¿Y por qué se pagaron en efectivo en lugar de usar la típica tarjeta de crédito? En este punto conviene recordar que el propio Gobierno del PSOE puso en marcha un cambio en la legislación española para evitar los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros con la idea de combatir el lavado de dinero negro. ¿Qué hacía un ministro de España moviéndose con grandes sumas de dinero en efectivo? ¿De dónde sacó ese dinero?

Las respuestas pueden ser muy variadas, pero fuentes del Ministerio de Transportes confirman que durante el mandato de Ábalos se siguieron procedimientos un tanto sui generis a la hora de justificar los gastos del ministro. De hecho, era habitual que García se dotase de grandes sumas de dinero en efectivo antes de cualquier viaje para ir pagando los gastos que fueran surgiendo. La duda está en saber si tanto Ábalos como García fueron lo suficientemente escrupulosos a la hora de separar los gastos particulares de los oficiales.

García solía viajar con tres sobres con dinero en efectivo. Uno para pagar los gastos del ministerio, otro para saldar las facturas relacionadas con el partido y un tercero para los gastillos del propio ministro. Extraño método en un mundo tan

digitalizado, pero todo es posible. Como nunca se pudo crear una comisión de investigación en el Parlamento para aclarar el asunto, nos quedaremos de momento con las ganas de saber si García llevaba bien las cuentas.

Inseparables

Koldo García y José Luis Ábalos son inseparables, incluso aunque el segundo haya dejado de ser ministro. La prueba es que ambos visitaron juntos once países en los tres meses siguientes a su salida del Gobierno, entre ellos la República Dominicana y Guinea Ecuatorial. Y eso a pesar de que García tiene concedida desde hace años una invalidez parcial por una discapacidad en los dedos de un pie que, supuestamente, no le permite andar con normalidad. «Trabajaba con permiso de la Seguridad Social», se justifican desde el Ministerio de Transportes. En su momento pidió la invalidez completa, pero no se la dieron y llegó a pleitear.

Oficialmente, y según se han encargado de airear desde el Palacio de la Moncloa, Ábalos tuvo que salir del Gobierno debido a su vida disoluta, como desveló la periodista Ketty Garat en THE OBJECTIVE. Otras fuentes apuntan a diversos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en donde supuestamente se mencionan hechos más graves.

Como desvelamos en su día, Ábalos aprovechó la pandemia para controlar personalmente buena parte de las compras de material sanitario que hizo el Gobierno en las primeras semanas de coronavirus. Gracias al estado de alarma, se pudieron gastar ingentes sumas de dinero sin seguir las tradicionales normas de contratación. Se suprimieron los concursos públicos y reinó la adjudicación directa.

El 14 de marzo de 2020, cuando el Ejecutivo aprobó oficialmente el estado de alarma, España pasó a tener un mando único administrativo, al frente del cual estaba el presidente del Gobierno. Sin embargo, según el decreto aprobado ese día, ese poder se delegaba en cuatro de sus ministros: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Luis Ábalos (Transportes) y Salvador Illa (Sanidad)

Gracias a ese poder delegado, Ábalos firmó una orden ministerial el 20 de marzo en la que el Ministerio de Transportes asumió la compra de mascarillas. Hasta ese día, era Sanidad quien llevaba el peso de la contratación de material sanitario y no sin dificultades, porque el organismo dirigido por Illa apenas contaba con personal y recursos suficientes para afrontar una crisis de tanta magnitud: su ministerio se había quedado escuálido al haber ido transfiriendo durante años las competencias sanitarias a las comunidades autónomas.

Por tanto, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden de Ábalos el sábado, 21 de marzo. En teoría, esa instrucción era para regular la compra y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes con el objetivo de garantizar el tránsito de mercancías y viajeros en condiciones adecuadas durante la vigencia del estado de alarma.

El problema es que, al haberse suprimido las tradicionales normas de adjudicación de contratos en la administración, la compra se hizo mediante adquisición centralizada, adjudicación directa y tramitación de emergencia. Es decir, se concedieron los contratos a dedo y se redujeron a la mínima expresión la transparencia y el control sobre los mismos.

Y luego pasa lo que pasa. El 14 de abril de 2020, Vozpópuli abrió su edición con el siguiente titular: «El Ministerio de Transportes compra ocho millones de mascarillas a una empresa sin experiencia en material sanitario». La información estaba firmada por los periodistas Alberto Sanz, Antonio Rodríguez y Gonzalo Araluce.

Resulta que, en virtud de la orden ministerial del 20 de marzo, el ministerio dirigido por Ábalos había ordenado la compra de 8 millones de mascarillas a la empresa pública Puertos del Estado y esa

compra se adjudicó a Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, una sociedad completamente desconocida en el sector sanitario español y dedicada a la ejecución de proyectos en África.

La compañía, con sede en Zaragoza, ofrece supuestamente asesoramiento técnico a empresas en campos como la salud, la energía o las infraestructuras agrícolas, y opera en países como Mauritania o Túnez. No obstante, en abril de 2020, que es cuando fue contratada, la empresa llevaba casi tres años sin comunicar ningún proyecto, desde que participó en la construcción de una central eléctrica en Angola en agosto de 2017.

Todo lo que rodea a la empresa Soluciones de Gestión huele especialmente mal. Pese a contar con apenas cinco trabajadores, según los datos del Registro Mercantil, logró contratos del Gobierno para la compra de material sanitario valorados en 40,5 millones de euros: dos de ellos del Ministerio de Transportes y otro del de Interior por recomendación del equipo de Ábalos, según confesó Marlaska en una respuesta parlamentaria.

El primer contrato se hizo a través de Puertos del Estado (24,2 millones de euros por 8 millones de mascarillas), el segundo a través de Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias (12,5 millones de euros por 5 millones de mascarillas) y el

tercero fue obra de Interior (3,48 millones de euros por 1 millón de mascarillas). Las adjudicaciones se hicieron a dedo y con una sola oferta presentada. En el caso del departamento de Marlaska, lo más sorprendente es que la entrega de la oferta por parte de Soluciones de Gestión se hizo en mano, una práctica casi erradicada en la Administración General del Estado, pues la totalidad de las empresas utilizan la vía electrónica cuando entregan la documentación.

Una empresa extraña

Así pues, una compañía que apenas había facturado 100.000 euros en sus últimas cuentas publicadas y que había arrojado unos números rojos de 1,1 millones de euros (año 2018), pasó a convertirse en uno de los principales proveedores de mascarillas del Gobierno. Sin tener una gran experiencia en el sector y sin producir directamente el material, su misión se limitó a intermediar con China, pero tampoco constaba que tuviera especiales vínculos con aquel país.

El Ministerio de Transportes y Puertos del Estado nunca aclararon por qué se recurrió a esta empresa. Pero las principales firmas del sector sanitario español, y en especial las que se habían dedicado tradicionalmente a importar material desde China, dieron de inmediato la voz de alarma y expresaron su malestar al Gobierno, lo que acabó provocando que en los meses sucesivos el

Ejecutivo fuera un poco más cauto en la adjudicación a dedo de contratos y diversificara el número de proveedores.

El accionista mayoritario de Soluciones de Gestión es Erromar Soluciones, con sede en Guecho (Bilbao). Y el administrador único de esta sociedad es Purdey Investment, a quien representa José Ángel Escorial Senante (también detenido por la Guardia Civil). Según publicó El Mundo, Escorial fundó dos empresas offshore en Malta en septiembre de 2008: Delta Advisory and Management Services Limited y Arce Investment Consulting Limited. Además, Escorial se presenta en las redes como consejero de un fondo especializado en el sector inmobiliario, Goya Global Holding, y es consejero delegado de la empresa Malta Capital, aunque no tiene actividad actualmente.

El día 16 de abril de 2020, Vozpópuli destapó que «el proveedor de mascarillas de Ábalos es socio en Angola de una empresa procesada por corrupción». Y es que Soluciones de Gestión se involucró en dos proyectos en Angola a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), Boavista II, con Cueto Comercial 92, una compañía procesada por corrupción en el caso Defex. La UTE se creó para la implantación de una central térmica flotante y para construir un centro médico en Luanda.

La empresa Cueto Comercial 92 se hizo famosa en mayo de 2019 porque el magistrado José de la Mata la involucró en el presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial. El juez detalló que existían indicios sólidos de que esa sociedad y Defex, empresa pública española de venta de armas, mantenían una operativa en Angola para «contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños». Curiosamente, la oficina de Soluciones de Gestión en Madrid está en el mismo edificio que la de Cueto.

Pese a las reiteradas consultas al Portal de la Transparencia y reclamaciones de información a las diferentes administraciones, los pliegos de estos contratos y los detalles de Soluciones de Gestión siguen siendo un misterio.

El escándalo de las mascarillas, unido al Delcygate y posteriormente a su participación directa en el rescate de Plus Ultra, han dejado a Ábalos con la permanente sombra de la corrupción a sus espaldas, si bien es cierto que todavía no se ha conseguido demostrar ninguna ilegalidad en los tribunales y tampoco está claro si actuaba por interés propio o para beneficio de su partido. En este sentido, resulta extraño que Sánchez le echase del Gobierno y del PSOE, pero le haya permitido conservar el escaño en el Congreso de los Diputados, por lo que Ábalos mantiene el aforamiento y solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo.

Todos los indicios apuntan a que Ábalos fue destituido de forma preventiva: Sánchez soltó lastre ante el temor de lo que pudiera aparecer en el futuro. Y la prueba es que lo quitó a la vez del Gobierno y del PSOE, para que no hubiera contaminación posible cuando estallara la bomba. Eso sí, le dejó con el escaño y el aforamiento, por si acaso llega a tener problemas con la Justicia.

Tribunales

Sanidad admite por primera vez que obligó a llevar mascarilla en pandemia sin aval técnico

La Audiencia Nacional obliga al departamento que lidera Mónica García a entregar información relevante



Ilustración de Alejandra Svriz.



Fran Serrato

@FcoSerrato

fs@theobjective.com

🕒 Publicado: 23/02/2024

Sanidad reconoce que impuso el uso de mascarillas sin informes técnicos. Es la primera vez que lo admite por escrito y lo hace después de que la Audiencia Nacional le requiriera aportar la documentación que solicitó Liberum hace año y medio a través de una querella. La asociación pidió al departamento que ahora lidera Mónica García los informes elaborados por la

Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud que avalaron la decisión de mantener el tapabocas en el transportes público hasta febrero del año pasado.

Las peticiones de Liberum han fructificado cuatro años después de que comenzara la pandemia y tras tres intentos fallidos. La Dirección General de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, da por contestada la solicitud de complemento requerida por la Audiencia Nacional, ya que la asociación consideró que no había recibido toda la documentación que solicitó en noviembre de 2022.

Liberum demandó los informes de los expertos de la Ponencia de Alertas, las actas de las reuniones y la relación de personas que formaban parte del comité de expertos que obligó a llevar las mascarillas. En un documento fechado el 13 de febrero al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Sanidad afirma que dichos especialistas no realizaban informes ya que su labor es «obtener el consenso técnico de todos sus miembros que queda plasmado en documentos de trabajo para su posterior elevación a la Comisión de Salud Pública (CPS) o al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España (CISNS)».

Sin informes de las mascarillas

«Por lo tanto, no existen dichos informes», insiste el escrito. La presidente de Liberum, Nandi Cuevas, considera que esa respuesta confirma el escenario que llevan años denunciando. No obstante, lamenta que la contestación no aporte toda la información requerida, ya que siguen sin conocerse las actas de las reuniones y la identidad de los expertos.

Nandi sostiene que «resulta especialmente grave, ya que al no existir informes, la responsabilidad de esas decisiones debería corresponder a esos especialistas». La asociación sostiene que Sanidad impuso la mascarilla sin ningún rigor científico ni informes que avalen dicha medida, aunque esta ya desapareció porque el tapabocas dejó de ser obligatorio en el transporte público hace un año y tampoco es necesario en los centros sanitarios desde el pasado julio.

El escrito también aborda la petición de informes y actas de las reuniones a los que se refirió Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. La respuesta remitida por Sanidad a la Audiencia Nacional subraya que dicho informe «no integra el expediente administrativo».

«La Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta no elabora informes ni emite actas tras sus reuniones.

Su función es elaborar documentos de trabajo o técnicos consensuados por sus miembros», insiste el texto que firman Simón y el recientemente nombrado director general de Salud Pública, Pedro Gullón. La respuesta reprocha a Liberum que ya quedó acreditado judicialmente que Simón firmó esos documentos, pero eso «no obsta a que se oculten dichos datos relevantes para este procedimiento».

La identidad de los expertos

El escrito de alegaciones también descarta revelar la identidad de los expertos que conforman la Ponencia de Alertas y de los miembros de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial. El informe reconoce que las ponencias técnicas tienen «una composición institucional con representatividad proporcional idéntica a la que tiene la CSP» e insiste en que los miembros de las ponencias técnicas son nombrados por los gobiernos regionales y los ministerios participantes, por lo que «tienen rangos variables».

«En este contexto, este centro directivo considera que son las propias comunidades autónomas las titulares de la información solicitada», insiste el texto. No obstante, reconoce que la CSP está integrada por un representante de la Administración General del Estado, del ministerio competente en materia de salud pública y el responsable de esta categoría en cada región. Además,

forman parte de ella con voz, pero sin voto, los representantes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Salud Carlos III.

Liberum recibió la respuesta el lunes, un día antes de que la Guardia Civil detuviera a 20 personas por cobrar supuestas comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia. Se les acusa de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Cuatro de los arrestados pasaron este jueves por la Audiencia Nacional, pero el juez los dejó en libertad, a la mayoría con medidas cautelares. La Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión al considerar que no existe riesgo de fuga, de alteración de pruebas ni de reiteración delictiva.

«El caso Koldo evidencia lo que llevamos mucho tiempo denunciando. Hubo una imposición política que respondía a intereses concretos. Por fin se ha descubierto la gran mentira de las mascarillas: sirvió para llenar los bolsillos de algunos. Hubo una mafia», lamenta Nandi Cuevas, presidenta de Liberum.

El uso del tapabocas en el transporte público dejó de ser obligatorio el 7 de febrero del año pasado, un día antes de que venciera el plazo otorgado por la Audiencia Nacional para que Sanidad remitiera la

documentación requerida por Liberum. La asociación reclamaba los informes elaborados por los expertos para mantener el uso de la mascarilla, una excepción en Europa que, además, incumplía el protocolo de actuación frente a la covid aprobado por el Gobierno, en vigor desde el 3 de junio de 2022.

Economía

Díaz ha modificado 23 veces por la puerta de atrás la reforma laboral pactada con la UE

Empresarios, abogados y economistas alertan de la inseguridad jurídica y la falta de garantías que está generando



Yolanda Díaz | Europa Press



Carmen Obregón

[@tamenobregon](#)
co@theobjective.com

🕒 Publicado: 20/02/2024

Este martes por la tarde, el Congreso de los Diputados debatirá una proposición de ley, a iniciativa del Grupo Plurinacional SUMAR, que abordará la reducción de la jornada máxima legal de trabajo ordinario. Un asunto candente de la actualidad política, que coincide con un clima contrario a las pretensiones de la titular de Trabajo y líder de Sumar.

Son varios los sectores del mundo económico que han identificado cómo la responsable del Empleo en España ha ido modificando la actual reforma laboral, aprobada en 2021, por la puerta de atrás, sin negociación ni diálogo social, llegando a introducir al menos hasta 23 regulaciones – como ha podido constatar THE OBJECTIVE–, que han subvertido una de las medidas estrella y por las que España ha recibido fondos europeos.

Se trata de modificaciones mediante reales decretos que no eran de índole laboral, reglamentos de leyes orgánicas y medidas urgentes que confunden en su aplicación a los empresarios y que, por otra parte, han elevado los costes laborales a asumir. Así lo subrayaba la semana pasada el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, cuando a comienzo del mes de febrero, Yolanda Díaz logró que el Consejo de Ministros diera luz verde a la prohibición de la reducción de la jornada parcial sin acuerdo del trabajador.

En opinión del máximo responsable de esta organización, éste no es más que «otro apretón de tuerca que invalida el diálogo social que recoge la Constitución en su artículo 7». En este sentido, el dirigente empresarial mantiene que «es difícil que te planteen sentarte en una mesa en ese diálogo, cuando cada tres minutos te van cambiando, en este caso, el Estatuto los Trabajadores, por puros intereses partidistas», lamentaba.

Cambios que afectan a la productividad y el empleo

Los cambios afectan a las relaciones laborales, ampliando nulidades de despido, incrementando las infracciones, trastocando la causa de los despidos colectivos, duplicando las exigencias de avisos de los empresarios o echando mano de un registro de horas que no funciona.

Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights y ex secretario de Estado de Empleo entre los 2015 y 2019, se pronunciaba recientemente en estos términos, con motivo de unas jornadas organizadas por Fedea, y en las que se analizaron las causas y la posibilidad de mejora de la baja productividad en España en comparación con el resto de los países de nuestro entorno.

En su intervención, Riesgo se refirió a esas modificaciones, señalando las 23 regulaciones de relevancia que se han ido cambiando a lo largo del pasado año, en el ámbito laboral, y que «básicamente acaban imponiendo mayores costes y más trabas a la flexiseguridad que hay».

Además –añadió–, «ahí hay otros proyectos que conocemos todos, y que no están todavía impulsados, como la obligatoriedad de establecer planes de movilidad en empresas de más de 250 trabajadores, además del aumento de costes de despido,

reducción de jornada sin reducción de salario y algunos otros proyectos, donde la agenda para impulsar la productividad y nivel del empleo, que es una agenda crítica, podría verse comprometida».

Más costes y cotizaciones adicionales

En opinión de Jorge Puente, experto laboral y socio director en Puente Legal Abogados, el actual Ejecutivo está socavando con su política de empleo «el principio de la autonomía de la negociación colectiva, que con carácter general establece el Estatuto de los Trabajadores y que nos es más que una extrapolación directa del derecho fundamental a la libertad sindical y el principio de libre empresa recogidos en nuestro texto constitucional, irrumpiendo por la vía del real decreto en materias que clásicamente estaban reservadas a la negociación colectiva, como expresión última de la libertad sindical y libertad de empresa».

«Tras el éxito que supuso la aprobación consensuada de la última reforma laboral promulgada por el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, el Ejecutivo – sostiene Puente–, se ha encomendado fervorosamente a subvertir la paz social lograda en aquellas fechas, mediante la promulgación de toda una serie de normativa en materia socio laboral aprobada extramuros del diálogo social y sin el debido consenso que sería exigible en la materia».

«A lo largo de todo el año 2023 –afirma Puente–, se han aprobado más de 23 normas que afectan gravemente a la gestión de las relaciones laborales, imponiendo más burocracia a las empresas, en lo que supone más costes, tales como cotizaciones adicionales por supuesta solidaridad, medidas para el colectivo LGTBI en empresas de más de 50 trabajadores, ampliación de los supuestos de nulidad del despido, etc.». Pero claro, es que además hay que sumar otro problema añadido –pondera–, y es que «todas estas medidas, adoptadas al margen del diálogo social, suponen que nos encontremos ante un derecho laboral profuso, disperso y difuso, que ahonda en la inseguridad jurídica en la que se han de mover las partes en sus relaciones laborales, todo ello sin contar con las normas que se promulgan por real decreto y que no se convalidan posteriormente por falta de apoyos parlamentarios, lo que conlleva la temporalidad de una normativa laboral que ahora podemos llamar fija discontinua».

Un sistema menos garantista

En opinión de Eva Hernández, socia en Escalona & De Fuentes Abogados, y responsable del Departamento Laboral, este cambio normativo por la puerta de atrás, contienen en sí «un listado muy trascendente» y que ha ocasionado un grave problema, ya que da lugar a «un sistema menos garantista para el empresario que el que tenía anteriormente, y además, al margen del diálogo social».

Hernandez se refiere, por ejemplo, «a la Ley 15/2022, con la que se crea una autoridad independiente para la igualdad de trato, pasando por la Ley 1/2023, en la que se establecen unos incentivos, que en general son de menor importe, incluso se reducen sustancialmente las ayudas a la contratación, a favor de la compañía, y sobre todo, mencionar la Ley de Empleo, 3/2023, donde se introducen importantes modificaciones en materia de falsos autónomos».

Precisamente sobre esta última norma, la Ley 3/2023 –afirma–, «es muy trascendente que se haya incluido al margen de la negociación con la CEOE». De ahí que se pregunte: «¿Por qué digo esto? Pues porque el sistema anterior era mucho más garantista para el empresario. Y llegamos a la situación de que cuando llega la inspección de trabajo levanta un acta de falsos autónomos, y entonces la empresa tendrá que regularizarlos de manera inmediata. Anteriormente –explica–, el empresario no estaba obligado a reconocer la relación como laboral ni tampoco hacerse cargo de las cotizaciones de los trabajadores, hasta que un juez dictaba lo contrario. Ahora mismo –prosigue Hernández–, el empresario tiene que iniciar el procedimiento judicial y, si no está de acuerdo con el acta administrativa, en todo caso, no paraliza el proceso de ejecución del acta de la inspección. Es decir –concluye–, sin perjuicio de que todavía no sea firme, el

empresario tiene que, automáticamente, pasar a regularizar al falso autónomo, lo que tiene mucha transcendencia desde un punto de vista práctico –señala–, sin perjuicio de que sea correcto o no, ya que al empresario le obliga a dar el alta a esos trabajadores sean o no falsos autónomos».

Una norma por cada 10 minutos

Para Christopher Dottie, director general regional de Hays Sur de Europa y vicepresidente de la Cámara del Reino Unido, la importancia no reside tanto en si las medidas tomadas después de la reforma laboral de 2021 van o no en contra de ésta; «eso un tema de expertos», matiza. «La importancia –señala– está en que el entorno se está haciendo complejo para las empresas, y no podemos olvidar que la mayoría de éstas, en España, son pymes, que son las que normalmente están las que menos dotadas para los cambios regulatorios».

Del aspecto de la regulación –ahonda– emanan buena parte de problemas, porque, «si la normativa no es clara, hay miedo por parte de las empresas, porque el entorno es complejo». Por tanto, defiende Dottie, lo ideal es «una legislación más amena y más sencilla y donde los canales de información sean mejores, ya que, en definitiva, las empresas, claro que quieren crecer y claro que todo el mundo quiere el bienestar de sus trabajadores».

Para los gestores administrativos, es evidente que el exceso de la regulación laboral está siendo una de las claves de bóveda que perjudican a las empresas y que, a la postre, acaba afectando también a la creación de empleo, porque las empresas ya no saben qué hacer ante tanto exceso regulatorio e inseguridad jurídica. Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, lo plantea a THE OBJECTIVE en términos matemáticos y cuestiona una convicción: «¿Cómo es posible que en 43 años se hayan aprobado 414.200 normas? Efectivamente –explica–, no da tiempo a leerse tanta norma, y aunque hay que considerar que no todas las normas afectan solo a los negocios, puesto que hay otro tipo de normas, lo cierto es que se regula a norma por cada diez minutos».

En la noticia, en un primer momento se atribuía al Grupo Socialista del Congreso la iniciativa de la reducción de la jornada, pero esta ha sido realizada por el Grupo Plurinacional de Sumar.

Economía

La voracidad legislativa asfixia al comercio: 1.140 normas en 2023, un 140% más que en 2019

Los establecimientos comerciales tuvieron que aplicar 3,1 normas nuevas cada día durante el año 2023



Supermercado. | Europa Press



Rocío Regidor

@RocioRegidor88

rr@theobjective.com

🕒 Publicado: 22/02/2024

La sobrelegislación en España sigue creciendo y afectando al tejido productivo. Concretamente, en el año 2023 se aprobaron o modificaron 1.140 normas que afectaron al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo, esto es un 139,5% más que en 2019, el año anterior a la pandemia (cuando se registraron 476, 1,3 normas diarias), según los datos proporcionados por WorldLex y analizados por THE OBJECTIVE.

Esto supone una media de 3,1 desarrollos legislativos al día durante el año pasado y supone un nuevo repunte sobre el año anterior, cuando se contabilizaron 2,7 normas diarias. Se trata, según apuntan a este diario fuentes del sector, de leyes nuevas o modificaciones sobre leyes ya existentes lo que «también es presión normativa porque tienes que estar pendiente y adaptarte al cambio».

Por categorías, la legislación relacionada con el medioambiente se lleva la palma con casi la mitad de la carga normativa, con 486 textos legales que afectan al comercio. Le sigue la seguridad alimentaria, con 254, y cuestiones administrativas relacionadas con la empresa (urbanismo, licencias...), que suman 221 normas. Desde Asedas, la patronal de supermercados que representa a Mercadona, Dia o Lidl, destacan que el comercio –y la distribución alimentaria en concreto– está comprometida con los procesos de economía circular, de descarbonización y de reporte de información para hacer más eficiente la cadena.

Sin embargo, lamentan que la legislación les llegue desde todas las administraciones –y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y distribución–. Lo que «supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia que, en algunos casos, ponen en riesgo el modelo de negocio del retail español», apunta María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas.

Se disparó con la pandemia

Desde 2020, coincidiendo con la llegada de la pandemia, la normativa se disparó a todos los niveles. Un aumento de la legislación que continuó durante 2021 cuando los establecimientos comerciales tuvieron que aplicar 7,5 normas nuevas cada día durante 2021, hasta un total de 2.743. De ellas, 2.025 normas estuvieron relacionadas con la pandemia del Covid-19, lo que arroja una media de 5,5 normas diarias en este ámbito.

En 2022, con la mejora de la situación sanitaria, la voracidad normativa también decreció hasta las 1.000 normativas. Sin embargo, desde el sector lamentan este nuevo incremento en 2023 hasta las 1.140 normas que afectan al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo. Una intensidad reguladora con la que ha arrancado el año. Solo en el mes de enero de 2024, las empresas del comercio tuvieron que aplicar 108 nuevas leyes o modificaciones a otras ya existentes, según los datos de Asedas.

El coste de la regulación

Estas leyes o modificaciones normativas afectan a todo tipo de categorías, principalmente a temas medioambientales. Desde la patronal de los supermercados ponen como ejemplo el futuro Reglamento de Envases y Residuos de Envases que se negocia en estos momentos en los trílogos

de la UE, y que «independientemente de las complejidades técnicas de la aplicación de algunos de sus artículos y de la falta de análisis de ciclo de vida tendrá un impacto aproximado de 150.000 euros por tienda».

Una cuantía que estiman desde Asedas solo por la instalación de equipos de recogida y reutilización de envases, sin contar con los gastos de personal y logísticos. Según su análisis, en cuanto a intensidad legislativa, las comunidades autónomas se sitúan en primer lugar en cuanto a incremento con 485 normas, «lo que complica la gestión especialmente para aquellas empresas que operan en varias comunidades», según lamenta la patronal de los supermercados.

Mientras, del total de las normativas que el sector tuvo que aplicar el año pasado, 344 llegaron desde las instituciones europeas. El Estado central, por su parte, sumó un total de 284 normas. De ellas, 123 regulan cuestiones relacionadas con la gestión empresarial (fiscalidad, urbanismo, digitalización...). En el ámbito local, la cifra se incrementa al considerar cuestiones como aperturas en días festivos, cortes de tráfico, obras, etc.

En línea con las protestas agrícolas

La situación del comercio coincide con las actuales denuncias del sector primario sobre la alta carga legislativa y administrativa que soporta, y que se extiende a todos los eslabones de la cadena de valor. Entre otras cuestiones, el sector primario lleva semanas protestando por el exceso de burocracia que soportan por parte de Europa. Los agricultores aseguran que les es imposible aguantar más registros y controles, además de lo que supone cumplir todos los requisitos para recibir ayudas. Por un lado critican que estas normativas son excesivamente severas con ellos al tiempo que son más permisivas con terceros países, como Marruecos y países asiáticos, a los que acusan de competencia desleal.

EL PODCAST DE 'EL LIBERAL'

Rodríguez Braun: «Cuando un político critica a Ortega es que está a punto de desaparecer»

El prestigioso economista argentino inaugura con esta charla el nuevo podcast de EL LIBERAL



Miguel Ors Villarejo
@MOrsVillarejo

🕒 Publicado: 18/02/2024

«Carmen —le dice afectando inquietud Carlos Rodríguez Braun (Buenos Aires, 1948) a Carmen Suárez, la productora de El pódcast de El Liberal—, una cosa te voy a preguntar, y es si van a verse mis calcetines». Son unos hermosos calcetines azul y grana que contrastan con el habitual aspecto formal (pantalón gris, chaqueta oscura, corbata de escuditos) de Rodríguez Braun, a quien nunca he visto en mangas de camisa.

Carmen asiente y Rodríguez Braun exclama aliviado: «¡Cuánto me alegro! Porque estoy muy orgulloso de mis calcetines de colores, aunque el par que he traído es bastante moderado para lo que soy habitualmente». A continuación se vuelve hacia los míos, que son unos impecables Argyle de rombos, y sentencia con gesto experto: «Tampoco están mal los tuyos».

Así es Rodríguez Braun: un tipo entrañable, detallista, educadísimo. Cuando la entrevista concluye, le tiende la mano a Carmen y le da las gracias, algo que pocos invitados deben de hacer, a juzgar por la expresión de la propia Carmen.

Las opiniones de Rodríguez Braun pueden molestar, porque es un crítico incansable de la tontería económica y que levante la mano el profano en la materia que no haya creído en algún momento de su vida en una de esas persistentes y bienintencionadas estupideces, como que el capitalismo se basa en la codicia y el comunismo en la solidaridad, que lo público es bueno y lo privado es malo o que el mercado nos tiraniza.

A Rodríguez Braun le encanta satirizar lo políticamente correcto, y lo hace con pleno conocimiento de causa, porque es catedrático de Historia del Pensamiento Económico, ha traducido a Adam Smith (del que la mayoría solo hemos leído las dos

citas famosas: la del carnicero y el panadero y la de que los empresarios solo se reúnen para conspirar contra el bien común), a Friedrich von Hayek y a John Maynard Keynes y es, en fin, autor de manuales académicos.

O sea, que controla bastante y por eso, cuando nos hunde su aguijón, duele.

Pero ya digo que es un tipo entrañable y lo hace amablemente, con humor y en un tono de voz moderado, algo rarísimo en España, y no digamos ya entre avezados tertulianos como él.

Otra singularidad de Rodríguez Braun es que es liberal, pero liberal de verdad, o sea, liberal por convicción, no como otros (yo mismo), que son liberales por descarte, porque no han podido ser otra cosa.

Rodríguez Braun es liberal-liberal, y ya digo que esto es extrañísimo bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar, pero es que además es argentino.

Pregunta- En España damos por supuesto que si eres argentino tienes que ser peronista. Es casi obligatorio. ¿Cómo acabaste haciéndote liberal?

Respuesta- Por pura casualidad. Cuando llegué a España, en enero de 1977, era un joven de izquierdas exiliado de la dictadura militar y cumplía todos los cánones del

progresismo. Entonces me dieron una beca para hacer el doctorado y allí me topé con grandes profesores, pero con uno especialmente bueno, que es Pedro Schwartz. Me cogió cariño y recuerdo que una de las primeras cosas que me dijo fue: «Joven, esas ideas de izquierdas que usted tiene están muy equivocadas». Y ahí fue donde empecé a recapacitar.

P.- ¿Fue una caída del caballo, como la de Pablo camino de Damasco, o más bien un proceso gradual?

R.- Fue un proceso gradual, porque, claro, yo me resistí. Uno tiene su dignidad...

P.- Eras un comunista convencido...

R.- Tenía esos ideales, sí. El propio Pedro [Schwartz] también había tenido un pasado suavemente socialdemócrata, pero se había convertido al liberalismo en la London School of Economics, gracias a maestros como Karl Popper. De modo que tuvimos debates muy interesantes y muy vivos en el seminario de doctorado, hasta que me convenció y decidí darle una oportunidad al liberalismo. Me puse a estudiarlo y en eso ando 50 años después.

P.- Hace poco The Economist publicó un artículo en el que explicaba que los economistas argentinos no solo brillan en el universo académico de Estados Unidos, sino en las revistas del corazón y en las redes

sociales, y que algunos tienen más seguidores en Twitter que Ricardo Darín o que Andrés Calamaro, y se casan con actrices. ¿Por eso acabaste haciéndote economista tú también?

R.- Yo no estoy casado con una actriz, pero sí respeto en parte el arquetipo del argentino, porque mi mujer es psicoanalista.

P.- La explicación de The Economist a la abundancia de buenos economistas argentinos es que es la típica reacción de un sistema inmunitario. Es como cuando la Guardia Civil estaba en la vanguardia mundial de la lucha antiterrorista: tener un enemigo implacable como ETA la obligaba a mantenerse en forma. Y era un motivo de orgullo nacional, sin duda, pero hubiéramos preferido destacar en otros ámbitos. Tampoco es una buena señal que haya tantos buenos economistas en Argentina. Significa que el país no va bien. ¿En qué momento se jodió la Argentina? Porque a principios del siglo XX, Buenos Aires era un destino tan atractivo para los emigrantes europeos como Nueva York.

R.- Lo habitual es situar el origen [del declive] entre mediados de 1940 y mediados de 1950, que son los años de Juan Domingo Perón, pero la semilla se sembró antes, en la década de 1930. La Gran Depresión derrumbó los precios de las materias primas y muchos conservadores vieron cómo su principal rubro de riqueza colapsaba y se asustaron y abrazaron políticas antiliberales.

El peronismo lo empeoró todo, pero las semillas se habían plantado antes... Respecto de la bondad de nuestros economistas, déjame que discrepe. No hay ningún Nobel argentino, pero sí es verdad que hay muchos economistas, y un amigo mío, Juan Carlos de Pablo, lo atribuye a la inflación. Eso ha convertido a todo el país en una inmensa facultad de Económicas, porque te obliga a decidir constantemente qué haces con lo que tienes en la cartera. Con los precios subiendo un 50% al mes, hay que espabilar.

P.- Inevitablemente te tengo que preguntar por Javier Milei. ¿Qué te parece?

R.- Solo he coincidido con él una vez, durante la pandemia, en uno de esos seminarios que se celebraban por Zoom, y me pareció un hombre muy moderado, nada que ver con su actual imagen. Respecto de su programa, no estoy seguro de que el experimento vaya a salir bien, pero pase lo que pase es un milagro que, después de un siglo de Gobiernos antiliberales de uno u otro signo, salga alguien lanzando mensajes liberales y la gente le vote.

P.- Por pura desesperación...

R.- Esa es, desde luego, una de las claves: la desesperación, el cansancio y el hartazgo, porque es que el socialismo no funciona. Argentina pasó de ser uno de los primeros países del mundo, y desde luego el primero

de América Latina, a ser uno de los últimos. Y eso sucedió en dos generaciones. Todavía, cuando recorres Buenos Aires y pasas delante de, no sé, el teatro Colón, te maravillas, y luego miras la fecha y ves que se hizo en 1908 y te queda un dolor... Lo que ha pasado [la victoria de Milei] es un milagro. A partir de aquí, está claro que va a haber toda clase de problemas y que si sale mal, los antiliberales dirán: «¿Veis como el liberalismo no funciona?» Pero si sale bien, no será solo un éxito para Argentina, sino para todo el mundo.

P.- La medida más comentada de Milei es la dolarización. ¿En qué consiste y por qué es buena?

R.- Supone que el Banco Central de la República Argentina, que tiene una larguísima y siniestra tradición de robar a sus ciudadanos, va a dejar de hacerlo. Eso se puede lograr transformando la autoridad monetaria en una institución responsable o, directamente, suprimiéndola. En España lo hicimos.

P.- ¿Cuándo?

R.- Que yo sepa, la peseta no existe más. La entidad que la emitía desapareció de un día para otro y más o menos funciona.

P.- Pero una cosa es una unión monetaria y otra, adoptar la divisa de otro país. Necesitas tener los billetes físicamente y eso es algo que puedes hacer en una economía

pequeña, como la panameña o la ecuatoriana, pero ¿de dónde va a sacar Milei billetes verdes para toda Argentina?

R.- Ese es uno de los reproches que le hacen, pero no me parece una objeción de peso. Primero, porque los puedes acumular gradualmente, no hay que hacerlo de golpe, y segundo, porque ya hay muchos dólares. En Argentina tú no puedes comprarte un piso pagándolo en pesos. La gente está acostumbrada a ahorrar en dólares, los guarda en cajas fuertes o debajo del colchón o fuera del país. La falta de billetes no es el inconveniente peor. La mayor dificultad es cómo vas a financiar el gasto público. Si te has quedado sin crédito en el exterior y has renunciado al impuesto inflacionario, debes realizar un recorte espectacular o decretar una subida de impuestos simplemente inconcebible. Milei ha optado por lo primero y, aunque sigue teniendo la dolarización como objetivo, va a ajustar antes la economía.

P.- De momento, la inflación no remite. [La tasa anual acumulada en enero fue del 254,2%, frente a la ya disparatada del 211,4% de diciembre].

R.- Claro, claro. Milei pretende acabar con la actual maraña de tipos de cambio [oficial, blue, turista, mayorista, etcétera] y ese sinceramiento [que consiste en devaluar el peso a su cotización real] comportará una subida de precios [porque las importaciones saldrán más caras].

P.- ¿Y tú crees que el país va a aguantar?

R.- No lo sabemos, pero el apoyo a Milei ha sido masivo y me cuesta creer que tantos argentinos lo hayan votado porque piensen que tiene una varita mágica y, con un par de pases, va a solucionarlo todo. En su primer discurso presidencial fue muy claro: «No hay plata —dijo—. No hay alternativa al shock». Va a haber muchas dificultades...

P.- Tú siempre has sido muy crítico con el Estado, pero todos los países prósperos tienen Estados grandes.

R.- [Riendo]. Es una pregunta malévola, pero viniendo de ti, no me extraña nada... Y la respuesta es que los países ricos no lo son porque tengan Estados grandes, sino que primero se hicieron ricos y solo después pudieron permitirse Estados grandes... Los Estados grandes no son una necesidad y, en su tamaño actual, son algo absolutamente inconcebible para los liberales del siglo XVIII. Adam Smith decía que a un rey que le va a quitar al pueblo un tercio de la cosecha hay que derrocarlo, y Smith era moderadísimo. El propio Hayek, analiza en Camino de servidumbre (1944) la Alemania nazi y, tras observar que el gasto público asciende al 50% de la renta nacional, concluye: «Claro, es que es una dictadura». Bueno, pues ese es ahora el peso del Estado en los países democráticos. Y si no va a más

es porque llega un momento en que un Gobierno no puede gravar más a la ciudadanía sin deslegitimarse. [Con acento abiertamente irónico]. Yo lo llamo «la ley fiscal de Rodríguez Braun», según la cual el Estado gasta hasta que la rentabilidad política del último euro gastado es inferior al coste político del último euro recaudado. Ahí se detiene porque, si sigue, la gente se cansa y vota a Milei.

P.- Los países con Estados mayores y más activos son más igualitarios. ¿No te preocupa la desigualdad?

R.- La desigualdad se ha convertido en la última bandera del antiliberalismo. Como ya no podían acusar al capitalismo de empobrecer a la gente, porque cada vez hay menos pobres, enarbolaron el estandarte de la desigualdad. Lo primero que dijeron fue que la desigualdad estaba aumentando en el mundo. Eso fue después de la caída del Muro de Berlín [en 1989]. Pero entonces un economista español (y me encanta decir que es español, porque es un independentista catalán) que se llama Xavier Sala i Martín pensó: «Qué raro, ¿cómo es posible que la desigualdad aumente justo cuando están saliendo de la pobreza los países más poblados del planeta, como la India y China?» Así que se puso a hacer los números y demostró que estaba disminuyendo. Entonces vino Thomas Piketty. «¡No, no! —dijo—. La desigualdad no aumenta entre los

países, pero sí dentro de los países». Y se sacó ese tocho [El capital en el siglo XXI], que es una operación comercial maravillosa, porque vendió un millón de ejemplares, aunque yo me niego a creer que toda esa gente se lo haya leído, porque son 800 páginas [679, en realidad].

P.- Leí en The Economist que ahora, como los ebooks están conectados a internet, se sabe en qué página se dejan, y con el libro de Piketty la inmensa mayoría no pasaba del prólogo.

R.- En cualquier caso, su éxito revela que había una gran demanda de un libro así, que argumentara «de manera científica», como les gusta decir, que la desigualdad había aumentado, pero lo cierto es que es muy cuestionable. En España, desde luego, no ha sido así. Un estudio del catedrático de Sociología Julio Carabaña [Ricos y pobres, 2016] demuestra que en España no está aumentado la desigualdad para nada. [El índice Gini no superó el pico de 1996 ni siquiera en lo peor de la Gran Recesión y actualmente está en los niveles de 1980]. Y los datos de Piketty para Estados Unidos están siendo crecientemente cuestionados por otros economistas. Pero además, ¿por qué sería mala la desigualdad? ¿Dónde está el inconveniente de que mi vecina sea más rica que yo? Que, por cierto, lo es, y cada año más, con lo que en mi bloque está aumentando la desigualdad. ¿Debería

preocuparme? Solamente en el caso de que su riqueza fuera fruto del robo. No siendo así, la preocupación por la desigualdad pone de manifiesto el fundamento moral más importante y menos confesable del socialismo, que es la envidia.

P.- ¿No es la solidaridad?

R.- ¡Por favor, no me confunda usted a la madre Teresa de Calcuta con la Agencia Tributaria! No son lo mismo, no.

P.- No sé si has visto la miniserie El Loto Blanco. [Deniega con la cabeza]. En la segunda temporada aparece una pareja que ha decidido no tener hijos porque considera inmoral arrojarlos a un mundo con tantos problemas. ¿De verdad nos va tan mal a los humanos?

R.- Es una actitud notable. Recuerdo que Karl Popper, ese gran pensador liberal austriaco al que conocí por mediación de Pedro Schwartz, me decía: «No lo entiendo. La gente insiste en que vivimos en el peor de los mundos, pero nunca hemos vivido mejor». Tenía razón, y me da igual la variable que elijas: renta per cápita, mortalidad, analfabetismo... En todo hemos progresado y, sin embargo, persiste esa sensación de que va todo fatal.

P.- ¿De dónde puede provenir?

R.- Adam Smith ya se burlaba en La teoría de los sentimientos morales de esos moralistas quejumbrosos y melancólicos que perpetuamente nos reprochan que seamos felices, y algo de esa pose hay. Un pesimista profesional gana muchos puntos, el público dice: «Es un hombre muy sabio, dice que todo va fatal». El fenómeno es mucho más complejo, por supuesto, influyen varios factores, pero no descartemos esa idea de que el pesimismo tiene buena prensa.

P.- El pesimista es un realista bien informado y el optimista es un tonto, el Cándido que satiriza Voltaire...

R.- Marian Tupy y Gale Pooley acaban de sacar en Deusto un libro [Superabundancia. Por qué a medida que crece la población crecen también los recursos disponibles] en el que, estadística tras estadística, demuestran cómo el mundo va a mejor, no a peor. Eso no significa que vivamos en el paraíso, porque no es así, pero al menos tengamos la decencia de mirar la realidad y no negarla.

P.- Porque existe el peligro de que, como toda va mal, cambiemos de estrategia y la fastidiemos...

R.- ...y porque del pesimismo lo que brota siempre es el antiliberalismo. Si tú concluyes que el mundo está fatal, tu siguiente decisión no será: «Dejemos a la gente en paz». Será: «Vamos a regular, a cobrar más impuestos, a poner un ministerio».

P.- Y España, ¿cómo va? El Gobierno ha aireado como un triunfo los últimos datos de PIB y empleo y, objetivamente, parecen buenos. Algunos analistas dicen que la economía está dopada y crecemos a base de deuda y gasto público, pero seguimos teniendo superávit en la balanza comercial y el consumo va bien. No hace falta más que salir a la calle. Están los restaurantes y los hoteles llenos y, si planeabas irte de semana en Semana Santa a alguna parte, es mejor que vayas haciendo la reserva.

R.- Desde luego, desde luego... El ministro [de Transformación Digital y de la Función Pública] José Luis Escrivá vino a vernos a la radio [Onda Cero] hace un tiempo, cuando aún era ministro de la Seguridad Social, y contó dos cosas que me llamaron la atención. La primera es que había sido alumno mío, algo que me encanta...

P.- Aunque no te acordabas de él...

R.- Y lo segundo fue que utilizó bien una palabra que se oye mucho. Dijo que la economía española estaba mostrando una gran «resiliencia», lo que significa que los resultados no están siendo tan malos como se esperaba. Porque los problemas siguen ahí: la inflación, el déficit público... Y en términos de crecimiento a largo plazo, Europa, en general, y España, en particular, languidecen.

P.- Estamos perdiendo terreno con respecto de Estados Unidos...

R.- ¡Y con respecto de nosotros mismos! Fíjate en los grandes episodios de crecimiento de España. En la década de 1960 el PIB aumentaba el 8%, el 9%. Y a mediados de los 80 y principios de los 90, que es la época de [Carlos] Solchaga [ministro de Economía y Hacienda de Felipe González], la tasa era del 5%. Ahora, en la expansión más reciente, la media ha sido del 3%. Hemos caído en esa atonía europea y yo no puedo evitar atribuirle al Estado que hemos creado, que es extraordinariamente oneroso y desincentiva el trabajo y el emprendimiento y ralentiza lo que investiga mi amigo [el catedrático de Historia Económica] Leandro Prados de la Escosura y que es el crecimiento a largo plazo. Porque al revés de lo que decía Keynes: «In the long run we are all dead» (a largo plazo, todos muertos), el largo plazo es lo más importante, porque es lo que determina el bienestar de un país.

P.- La vicepresidenta Yolanda Díaz alardea de que su reforma laboral ha acabado con la precariedad, pero las horas trabajadas no dejan de caer, según el Banco de España. ¿Qué te parece a ti?

R.- No quiero criticar a Yolanda Díaz, porque igual fue alumna mía, aunque tampoco creo...

P.- Si lo fue, sufrió un efecto rebote...

R.- En cualquier caso, no hay que personalizar en Yolanda Díaz un problema como el paro, que es una herencia del franquismo, una dictadura muy intervencionista y cuya legislación laboral ningún partido se ha atrevido a tocar más que parcialmente.

P.- Se han preservado las condiciones laborales de los empleados veteranos, pero a costa de precarizar las de los jóvenes.

R.- Exacto. Empezó con Joaquín Almunia, cuando era ministro de Trabajo [de Felipe González, entre 1982 y 1986]. Porque eran socialistas, pero no tontos, y dijeron: «Aquí hay que hacer algo». Tenían dos opciones: o liberalizaban el mercado de trabajo del todo o lo fraccionaban y liberalizaban una parte, y optaron por lo segundo. El PP se ha limitado luego a seguir la corriente, pero yo no pierdo la esperanza de que algún día se haga una reforma en profundidad. ¿Y sabes por qué? Porque no vulneraría la esencia del estado de bienestar. En todos esos países de Europa central y del norte que admiramos tanto, el paro es del 4%, del 5%. ¿Cómo es que, teniendo como tienen unos Estados tan onerosos como el nuestro, disfrutan de pleno empleo? Porque sus relaciones laborales no están tan intervenidas y yo creo que lentamente, a trancas y barrancas y con tropiezos, acabaremos convergiendo con ellos. Dicho esto, no podemos negarle al actual Gobierno una gran capacidad para la inventiva y el disfraz, porque tapar los parados con los fijos discontinuos requiere imaginación.

P.- ¿Qué opinas de los beneficios? ¿Ganan demasiado los bancos y las energéticas, como señalan algunos miembros del Gobierno?

R.- Esta retórica hay dos formas de verla. Está la derrotista, que es decir: «Qué barbaridad, otra vez volvemos a esta basura fascista o comunista de que los beneficios empresariales tienen la culpa de todo, incluso de la inflación, que es un disparate técnico sin parangón». Podemos ponernos pesimistas y concluir que no hemos aprendido nada, pero, si te fijas, en este país tan supuestamente antiempresarial, donde todos querían ser funcionarios y nadie quería emprender, resulta que muchos emprenden. Ese es el punto uno. Y el punto dos es que, en los casi 50 años que llevo viviendo en España, las opiniones sobre los empresarios han mejorado. El reconocimiento es mucho mayor. ¿Y quieres una prueba? La falta de apoyo electoral de los enemigos de los empresarios. Cuanto más estridentes son sus mensajes, menos votos sacan. De hecho, la forma más rápida de predecir que un político está a punto de desaparecer es que ataque a Amancio Ortega. Fíjate en Podemos. Era un partido importantísimo, pero se puso a decir que Amancio Ortega era lo peor del mundo y tal, ¿y dónde ha acabado?

P.- Sí, esto está cambiando, efectivamente. Para ir cerrando, ¿qué te parecen las protestas del campo?

R.- Los agricultores son como la vida misma, una mezcla de aciertos y errores, de una de cal y otra de arena. Yo comparto sus críticas a los impuestos, a las regulaciones, a la burocracia tanto española como europea, a las tonterías de ecologistas que se les ocurren a unos funcionarios que no han pisado un huerto en su vida. Simpatizo mucho con todo eso. Ahora bien, estoy completamente en contra de que se corten las calles, y no puedo evitar pensar en mi Argentina natal, donde los piqueteros, que se dedican también a interrumpir el tráfico y a romper el mobiliario urbano, se han convertido en una fuerza política muy importante. Milei hizo campaña contra ellos y la gente le ha votado y ha amenazado a los piqueteros con retirarles las ayudas: «El que corta las calles, no cobra». Así que yo creo que va a resolver el tema rápidamente... Lo segundo que no me gusta de los agricultores es que en el centro de sus reivindicaciones late un mensaje proteccionista y con eso hay que tener mucho cuidado, porque lo que haces es cerrar la puerta al pobre campesino africano, marroquí o de donde sea.

P.- ¿Qué balance haces de los últimos 40 años de España y cómo la ves en los próximos 40?

R.- Es una buena pregunta y sería curioso formularsela al representante promedio de nuestra especie, es decir, coger a todos los seres humanos que ha habido a lo largo de la historia, elegir al individuo promedio del año promedio y decirle: «Oiga, ¿usted cómo

piensa que van las cosas?» Estoy seguro de que respondería: «¡Uy, muy mal!» Siempre ha sido así. Recuerdo que un profesor que tuve en el colegio, un hombre magnífico, se presentó un día en el aula con un libro y, tapando la cubierta para que no viéramos cuál era, nos dijo: «Os voy a leer un párrafo y tenéis que adivinar a qué época se refiere. No necesito el autor, solo la época». Empezó entonces a declamar un texto en el que todo eran quejas: nuestro país está fatal, cada vez hay más pobreza e injusticia, la juventud no tiene futuro... A continuación cerró el libro y todos levantamos la mano, yo el primero, y dijimos: «Es un texto actual». ¿Sabes de quién era? ¡De Platón! O sea, que mucho cuidado con preguntar a la gente, porque tiende sistemáticamente a lamentarse, cuando lo que deberíamos es felicitarnos, porque en los últimos 40 años España y el mundo han mejorado extraordinariamente.

P.- Y no vamos hacia la aniquilación, como dicen los personajes de El loto blanco.

R.- Desde hace muchos años, en Onda Cero, yo cuento una viñeta, así que tengo una colección enorme y hay una maravillosa del Wall Street Journal. Se ve a dos dinosaurios mirando cómo se acerca un meteorito, y uno le dice al otro: «Igual no pasa nada». [Risas]. ¡Pero claro que pasó! El meteorito cayó y acabó con los dinosaurios. O sea, que mucho cuidado a la hora de hacer predicciones. Dicho lo cual, a mí me parece

que en España y el mundo existe una tendencia racional de respeto hacia la libertad individual y de desconfianza hacia el poder lo suficientemente poderosa como para mirar al futuro con optimismo.

Economía

El 60% de las películas nominadas a los Goya ingresó más en ayudas que en las taquillas

Apenas el 10% de los filmes españoles ingresaron más de 100.000 euros en taquilla en 2023



El director de cine Pedro Almodóvar. | Agencias



Jaime Cervera

@jcervera_
jc@theobjective.com

🕒 Publicado: 17/02/2024

No es raro que la gala de los Goya cuente con una buena dosis de politización y la del pasado sábado no fue una excepción. Además de encumbrar a *La sociedad de la nieve* con 12 galardones, la gala incluyó referencias feministas —a raíz del caso de supuestas agresiones sexuales por parte del director Carlos Vermut—, ecologistas, propalestinas, a favor del colectivo LGTB y hasta en contra del nuevo presidente argentino, Javier Milei.

Pero tal vez el rifirrafe más sonado fue el que protagonizaron el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el realizador Pedro Almodóvar. La polémica empezó cuando, con anterioridad a la gala, el político de Vox dijo haber escuchado varias referencias de la «élite mediática» en las que se hablaba de los agricultores y ganaderos que estos días protagonizan protestas por toda España como de «señoritos». «Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castilla y León, los señoritos son los que quieren vivir de obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles», afirmó García-Gallardo.

La respuesta de Almodóvar se produjo instantes antes de entregar el último premio de la noche, el Goya a Mejor Película. El director manchego contestó diciendo que «el dinero que los cineastas reciben como anticipo lo devuelven con creces al Estado a través de sus impuestos y de la Seguridad Social, además de crear miles de puestos de trabajo».

Pero ¿quién tiene razón? ¿Realmente hay películas que recaudan más por subvenciones que por taquilla? ¿Llega a devolver el sector del cine lo recibido en ayudas? Para empezar, habría que decir que todos los sectores productivos de este país, todas las empresas españolas y sobre todo

todos los contribuyentes pagan impuestos sin que por ello reciban ninguna subvención. Por lo que la justificación de las ayudas por parte de Almodóvar en que el cine «devuelve lo recibido a través de sus impuestos y de la Seguridad Social» es cuanto menos floja.

Así pues, fijémonos en el principal factor para medir la popularidad de una película, más allá de premios y críticas: la taquilla. THE OBJECTIVE ha analizado los 33 largometrajes que optaban a llevarse el Goya en alguna de las 28 categorías, cotejando sus datos de recaudación y las ayudas públicas recibidas por parte del Ministerio de Cultura. De esas 33 películas, más del 60% (20) ingresó menos en las salas que por subvención.

Entre las cinco nominadas a mejor filme, sólo La sociedad de la nieve (que no recibió ayudas, sino que contaba con capital de Netflix) y 20.000 especies de abejas (cuya recaudación de 921.095 euros superó a la ayuda de 680.000 euros que recibió) no han sido deficitarias; por el contrario, el saldo de pérdidas entre taquilla y subvenciones fue de -315.599 euros para Saben aquell, de -567.316 euros para Cerrar los ojos y de -196.278 euros para Un amor. Además, según datos oficiales del Ministerio de Cultura, la única que se coló en el top 10 de las películas más vistas en 2023 fue La sociedad de la nieve (la única de las cinco que no recibió subvenciones), a pesar de que

se incorporó al catálogo de Netflix apenas tres semanas después de su estreno en salas. El resto de las nominadas a mejor película no entraron en el top 20 de la taquilla nacional.

Otros casos destacados son *El sueño de la Sultana*, nominada a Mejor Película de Animación, que recibió 357.000 euros en ayudas y sólo recaudó 6.971 euros (apenas 1.310 espectadores); *Mamacruz*, candidata a Mejor Montaje, que se embolsó 400.000 euros de subvención y sólo rindió 28.184 euros en taquilla; *La ermita* (1.200.000 de ayuda y 83.270 de recaudación); *El amor de Andrea* (49.742 vs. un millón); *La imatge permanent* (10.152 vs. 480.000); *La ternura* (182.540 vs. 900.000).

Además, hay nueve películas que recibieron un millón de euros o más. Son *Saben aquell*, *Cerrar los ojos*, *Un amor*, *El maestro que prometió el mar*, *Campeonex*, *Chinas*, *Te estoy amando locamente*, *Robot dreams* y *La contadora de películas*. Sólo dos de ellas recaudaron más de lo que recibieron: *El maestro que prometió el mar* (1.573.079,20 euros de taquilla) y la exitosa *Campeonex* (11.680.374,57 euros en salas).

Estas cifras acotadas a las películas nominadas a los Goya se trasladan a la industria del cine español en general. Así, el sector recibió en 2023 ayudas por valor de 167 millones de euros, el montante más alto en los últimos años. En contraste, los filmes patrios estrenados en salas apenas

recaudaron poco más de 81,5 millones, algo menos de la mitad del dinero que percibieron en subvenciones.

La estadística del Ministerio de Cultura también arroja algunos datos interesantes sobre la taquilla. Por ejemplo, de las 568 películas exhibidas en salas españolas en 2023, más de la mitad (307) recaudó menos de 1.000 euros; cerca del 80% (446), menos de 10.000 euros; y casi el 90%, (60) menos de 100.000 euros.

Opinión

El repudio del héroe

«Estas líneas van dedicadas en modesto homenaje a David y Miguel Ángel, guardias civiles, o sea guardianes de la civilización legal»



Varios compañeros lamentan la pérdida de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate. | EP



Fernando Savater
@Savater_

🕒 Publicado: 18/02/2024

En todas las épocas y en todas las comunidades humanas se han llevado a cabo acciones heroicas, aunque la mayoría hayan pasado desapercibidas. Hoy seguramente ocurren en los escenarios bélicos, en Ucrania o Gaza, donde militares y civiles van más allá de su deber e incluso del sentido común más necesario para conquistar objetivos improbables, salvar a compañeros o familiares, hasta para destruir a más enemigos. Pero no hace falta ir a campos de batalla ni buscar hazañas truculentas: en las situaciones más pacíficas

de nuestras urbes hay mujeres que sin apoyo masculino sacan adelante a dos o tres hijos pequeños simultaneando un par de empleos precarios, maridos ancianos que cuidan con amorosa paciencia a sus cónyuges con Alzheimer, maestros y maestras que se enfrentan cada día con una turba de niños respondones y se esfuerzan hasta lo milagroso por convertirlos en herederos de la Ilustración... Y las enfermeras, y los médicos que viajan de pueblo en pueblo para que nadie se quede sin ser atendido, y los bomberos, y los pescadores y... los policías, más necesarios que nunca y tan detestados como siempre, y los guardias civiles, los admirables guardias civiles.

Guardias civiles como los que fueron asesinados en las aguas de Barbate por hampones narcotraficantes y por la incuria de quienes no les dotan de los instrumentos necesarios para su tarea y los mandan a una muerte casi segura «porque para eso están». Los héroes, a la vista está, son también víctimas colaterales o propiciatorias de la aciaga problemática humana, empeorada por la sociedad injusta, por la naturaleza atroz (ambas cuentan con partidarios beatos) y por la crueldad del azar que nada respeta. Frente al caos letal sólo están los héroes, muchos de ellos lo son sin poderlo remediar: y detrás nosotros, temblando, esperando que se inmolen para defendernos o nos rescaten.

Algunos (me viene a la memoria Bertolt Brecht, pero sé que son más) han lamentado públicamente los tiempos y las sociedades en que los héroes son necesarios. En efecto, la necesidad heroica surge cuando no basta con cumplir los deberes normales, cuando se abren vacíos que la simple tarea bien hecha no puede superar y hace falta un atletismo excepcional de la voluntad para remediarlos. Los héroes son necesarios cuando la vida social incumple sus promesas y nos provoca con exagerados retos, lo mismo que un sentido del equilibrio fuera de lo normal se requiere para bordear con paso firme enormes precipicios pero no para pasear por la calle un día de primavera. Sí, claro, pero esta argumentación no me convence del todo. Convengo en que no es buena señal colectiva estar reclamando constantemente a todo el mundo estatura heroica y prefiero que baste para vivir como es debido una buena disposición rutinaria sin alharacas. Pero moralmente me parece imprescindible que se sepa que las peripecias de la humanidad son tan imprevisibles que antes o después algún tipo de heroísmo siempre llega a ser necesario.

Hace falta algo de fibra heroica en el alma más vulgar para que pueda llamarse alma y no simples reflejos condicionados. Todo el que quiera llega a ser verdaderamente humano debe ser capaz alguna vez de lo sobrehumano si llega el caso: esta es la primera lección de la ética y que me perdone Kant si no lo digo a su modo,

aunque por supuesto él me entendería muy bien. De modo que no comparto lo de «pobres de los tiempos y sociedades que no se remedian más que con héroes» y prefiero: «¡Pobres de las sociedades y las épocas que no tienen héroes ni para un remedio!». En la literatura, la lírica es el lujo (y en los mejores casos la lujuria) pero la épica es, ay, tanto ayer como hoy, lo sencillamente imprescindible.

**«Malo es no saber que hay
que admirar a los héroes
pero aún peor admirar con
la baba caída a los héroes
equivocados»**

Lo malo es que la educación actual (por llamarla así, perdonen la ironía despiadada) no recomienda a los neófitos el heroísmo o, mejor, no les propone los ejemplos de los verdaderos héroes. Malo es no saber que hay que admirar a los héroes pero aún peor admirar con la baba caída a los héroes equivocados. Los jóvenes se afilian al culto desordenado a los triunfadores, cubiertos de likes en la página en que figuran sus hazañas. Pero el verdadero héroe, el héroe necesario, rara vez aparece como envidiable y es la cualidad de ser envidiado la que admiran los boquiabiertos. Se envidia a los multiadmirados y se admira a los que parecen envidiables. Pero en cambio el auténtico héroe pasa desapercibido o se le percibe como un pringao, digno en el mejor

caso de compasión pero desde luego sin ser modelo más que de fracaso. Esos guardias civiles abandonados sin recursos por sus mandos y triturados por los gángsters, que dejan atrás como único patrimonio viudas desoladas y huérfanos de corta edad... Esos padres y madres que protestan porque sus niños pierden su lengua materna al ir a escuelas indignas de ese nombre y tienen que soportar que les llamen fachas y provocadores porque piden que se cumpla con ellos la constitución sin la cual no hay libertad cívica... No se les admira, no, a veces se les ridiculiza y otras se les compadece, pero en general la pregunta desdeñosa es: «¿Y qué sacan con eso?». Nada, claro, por eso son héroes: no «sacan» nada de los demás, no maman de las ubres públicas, no disfrutan de subvenciones ni hacen negocio de ningún modo, ni siquiera se venden como víctimas. No sacan sino que ponen de su parte, enriquecen a quienes muchas veces no saben lo que reciben ni por tanto lo agradecen como es debido. Ahora a los héroes se les rechaza porque lo son, porque su generosidad obstinada debería recordarnos que significa vivir en sociedad y sin embargo nos avergüenza como un reproche. Gracias a ellos no somos una simple piara hozando en cuentas corrientes o en mitologías ideológicas (de izquierdas, mayormente) sino un proyecto de sociedad libre, igualitaria y fraterna aunque hoy devenida una comuna de identidades irreconciliables y obligatorias.

Estas líneas van dedicadas en modesto homenaje a David y Miguel Ángel, guardias civiles, o sea guardianes de la civilización legal, asesinados en Barbate por defender el bien común, cuya muerte no mereció ni un minuto de silencio en el Parlament de la Generalitat de Cataluña, esa pútrida sentina.

Opinión

La disolución del PSOE

«Galicia deja en evidencia que la estrategia de Sánchez condena a los socialistas y encumbra a los independentistas»



Ilustración de Alejandra Svriz.



Antonio Caño
[@Antonio Cano](#)

🕒 Publicado: 19/02/2024

Galicia puede ser el comienzo de un proceso de disolución del PSOE, no a favor de la izquierda alternativa que no hace tanto amenazó con el sorpasso, sino en beneficio de los partidos nacionalistas independentistas a los que ha allanado insensatamente el camino hacia el éxito desde que sus votos han sido necesarios para mantener a Pedro Sánchez en el poder. Galicia ha confirmado algo que se había comprobado ya en casi todas las elecciones autonómicas de mayo y que algunos socialistas sospechaban en sepulcral silencio: muere el partido para salvar a Sánchez.

Por contraste, el resultado de las elecciones de ayer debe considerarse un éxito del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo. El partido revalida una mayoría absoluta muy valiosa, puesto que nunca es sencillo sobreponerse al lógico desgaste en el poder durante dos décadas. Por lo que a su líder respecta, si sobre él hubiera sido lógico descargar toda responsabilidad en el caso de una derrota, es justo atribuirle también el mérito de una victoria que refuerza su papel como líder de la oposición.

Los resultados gallegos recuperan una tendencia de cambio político en España que se había mostrado evidente en las elecciones de mayo y que hace aún más anómalo el desenlace de las elecciones de julio. España está gobernada en estos momentos por partidos que no gozan del necesario respaldo popular. El PSOE no ha llegado al 15% de los votos en Galicia y su socio de coalición, Sumar, no ha conseguido ni un sólo escaño y un raquítico 2% del voto, a pesar de que su líder, Yolanda Díaz, es gallega y ha desarrollado en esa región la mayor parte de su carrera política.

Sólo el extravagante pacto de los socialistas con los partidos independentistas sostiene a Sánchez en el poder, y eso, a cambio de minar las opciones electorales del PSOE en la mayor parte de España. Es el tercer partido en la Comunidad de Madrid, después de la izquierda radical, y el tercero en Galicia, muy por detrás del separatista y

extremista BNG. Las próximas elecciones vascas seguramente reservarán para el PSOE el rol de comparsa en la lucha del poder entre PNV y Bildu. Cumplirá con ese papel tratando de no perjudicar los intereses de Sánchez en Madrid. Y en Cataluña, priorizando de nuevo los intereses de Sánchez, se ha sacrificado el protagonismo de Salvador Illa, vetado por Junts, lo que probablemente conducirá a que el PSC se quede sin la victoria que parecía tener en su mano hasta hace poco.

Este proceso de disolución del PSOE constituye una verdadera tragedia para la democracia española porque deja la defensa del actual marco constitucional en las manos casi exclusivas del PP. Si esto es malo para los valores y las políticas de izquierda que cualquier país estable necesita, resulta alarmante para el futuro de España, puesto que convierte a los partidos que sueñan con una confederación republicana en única alternativa en las tres comunidades históricas.

«Una mayoría de votantes entiende ya con claridad que el único propósito de esta izquierda es el de conservar el poder a toda costa»

Ninguno de estos peligros podrán abordarse adecuadamente mientras el Partido Socialista persista en el camino por el que Sánchez lo conduce. Los pactos con Junts y ERC, la ley de amnistía, los acuerdos con Bildu, las continuas concesiones al independentismo por parte del Gobierno de la nación conduce de forma irremisible al PSOE al precipicio y a todo el país hacia una crisis potencialmente muy grave.

No tengo dudas de que muchos socialistas lo ven con claridad, pero el partido ha entrado en una dinámica fatal en la que se hace muy difícil frenar la tendencia actual. El daño ya está hecho. El Gobierno —Sánchez y Yolanda Díaz de la mano— ha arruinado el prestigio de la izquierda en toda España. Una mayoría de votantes entiende ya con claridad que el único propósito de esta izquierda es el de conservar el poder a toda costa. Y, por mucho que se resistan, lo acabarán perdiendo. Su plan naufragará de forma escandalosa. Serán desalojados del poder antes de lo que piensan y de forma más abrupta de lo que pueda calcularse hoy. El riesgo para todos es qué país nos dejarán y cuánto costará sacarlo adelante.

Opinión

El insoportable silencio de los militantes

«Los partidos se han convertido en plataformas de adheridos para aplaudir las decisiones del líder y esperar que se les asigne un cargo que hacen su profesión»



Ilustración de Alejandra Svriz.



**Francesc
de Carreras**

🕒 Publicado: 22/02/2024

El gran obstáculo al buen funcionamiento de la democracia son los partidos políticos. En este diagnóstico hay una amplia coincidencia. Sin embargo, no le sabemos encontrar una solución satisfactoria. Y alguna de las últimas innovaciones, me refiero naturalmente a las denominadas «primarias», no han hecho más que empeorar las cosas.

En el plano de los principios también hay un acuerdo amplio, incluso total: sin partidos no hay democracia, es algo indiscutible. Su función está bien definida en el primer inciso del art. 6 de la Constitución: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política». Ahí encontramos muchos elementos sin los cuales no existe la democracia: pluralismo político, voluntad popular y participación política.

El problema es ¿qué tipo de partidos? Dicho artículo de la Constitución, en su último inciso, sólo nos suministra un rasgo muy genérico: «Su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos». Ahí está el meollo de la cuestión y es lo que no sabemos resolver: qué es ser democráticos.

Sólo muy vagamente podemos intuirlo acudiendo al significado de las funciones antes dichas: pluralismo, voluntad popular y participación. El pluralismo es una condición de la democracia y no ofrece problemas más allá de que se reconozca y se permita de forma razonable: en ese aspecto el tipo de sistema electoral es básico.

Los otros dos elementos podrían reducirse a uno: concurrencia de los partidos a la voluntad popular como instrumento de la participación política. Es decir, el mal

funcionamiento de los partidos dificulta o impide la participación política y, sin ella, no hay Estado democrático porque dicha participación es un elemento esencial.

«Quizá deberían participar en la elaboración de las listas los simpatizantes, aquellos que en ningún caso aspiran a un cargo pero son firmes partidarios de que su partido gane las elecciones»

Hemos avanzado algo pero no hemos encontrado la solución. Ya hemos advertido que la misma no es fácil y, añadimos ahora que solucionar la cuestión al cien por cien resulta imposible. Pero al menos debemos tener la ambición, que no es poca, de intentar mejorar la situación actual que es la peor en los 45 años que llevamos de democracia. Literalmente, no podemos decir que estamos en una democracia de partidos sino que estamos en una democracia de líderes.

No entremos en los factores que nos han llevado a eso, las primarias desde luego es un factor, pero también hay otros de muy diverso tipo, especialmente en el campo de la revolución tecnológica de las comunicaciones. Como disculpa al mal

resultado del PSOE en las elecciones gallegas se ha dicho, a posteriori, que fue debido a errores de comunicación. En otras ocasiones, muchos y diversos partidos han utilizado también esta disculpa.

Hoy día comunicación -mala comunicación, claro- es propaganda, en casos con una gran dosis de demagogia, de promesas que no pueden cumplirse y lo saben perfectamente quienes las formulan. Con demagogia no hay buena democracia, hay simple populismo. Por tanto, el problema no está ahí.

Quizás el problema está en que los partidos se han transformado profundamente, con lentitud pero de forma irreversible. Los partidos ya no son estructuras basadas en muchos cientos de miles de militantes que pagan sus cuotas y acuden con más o menos regularidad a sus agrupaciones locales. Los militantes de los partidos están desapareciendo, sólo quedan los que tienen cargos o aspiran a conseguirlos, a lo más se añaden también sus familiares próximos y algunos amigos.

Con las primarias, con la elección directa de los cargos, en especial de los líderes locales y ya no digamos del líder nacional, los partidos se han convertido en plataformas de adheridos para aplaudir las decisiones del líder y esperar que se les asigne un cargo que enseguida convierten en profesión para ganarse mejor la vida que en el sector privado.

¿Dónde queda la voluntad del pueblo, la participación política de los ciudadanos? Queda reducida al momento de votar, al día en que puede introducir su papeleta en la urna, siempre con la limitación de que se le ofrecen listas de candidatos que ellos no han elaborado. Por tanto, votan a líderes, los que encabezan esta lista, el que va de segundo ya no importa, todo el poder para el primero.

«Nos jugamos en ello la creencia de que la democracia es la peor forma de gobierno a excepción de todas las demás, que siempre ha sido el gran elogio»

Por tanto, quizás ahí está el quid de la cuestión: la elaboración de las listas. Si las confecciona el que las encabeza pondrá a personas de su confianza, lo cual en términos reales quiere decir personas dispuestas ciegamente a obedecerle porque le deben el cargo y quieren seguir en el mismo. Partidos de líderes, como he dicho, quizás ni siquiera debemos denominarlos partidos sino plataformas a las órdenes de un líder.

¿Cómo podemos poner remedio a esto? Sin tener la varita mágica que nos dé la solución, quizás la manera es que los potenciales votantes participen en la

elaboración de las listas, que no sólo les voten los militantes sino también los simpatizantes, aquellos que en ningún caso aspiran a un cargo pero son firmes partidarios de que el partido con el que simpatizan gane las elecciones.

Quizás de esta manera los militantes que aspiren a un cargo -cosa perfectamente legítima- no tendrán que permanecer callados para obtener los favores del líder sino que deberán buscar el apoyo de los simpatizantes, mucho más plurales y desinteresados.

Todo tiene sus inconvenientes y esta solución también. Además, todo puede pervertirse con el tiempo. Pero algo hay que hacer, cuando menos reflexionar y debatir. Porque lo insoportable es el silencio de los militantes de los partidos cuando en privado las quejas sobre la orientación del partido van en aumento. Nos jugamos en ello la creencia de que la democracia es la peor forma de gobierno a excepción de todas las demás, que siempre ha sido el gran elogio. Pronto pueden salir, con algunas razones, los que digan que es la peor forma de gobierno. Tal cual, a secas.

Opinión

El fracaso de un PSOE destituyente

«El PSOE coloca a los votantes ante una disyuntiva diabólica: no eligen entre izquierda y derecha, sino entre proyecto constitucional o proceso destituyente»



Ilustración de Alejandra Svriz.



David Mejía
[@davidmejiaNY](#)

Publicado: 20/02/2024

Cuando te cruzas con un gallego en la escalera nunca sabes si sube de votar al PP o si baja a votarlo. Aunque en esta ocasión se alimentaran las dudas hasta el último momento, el gallego de la escalera no cambió su voto. Por mucho que disfrutemos haciendo de la política espectáculo –y de todo espectáculo política- no hubo sorpresa final. Los comentaristas trataron de imprimir al escrutinio el ímpetu de la

narración deportiva, pero ni con esas: no hubo susto en Riazor, ni remontada en el tiempo de descuento. El PP volvió a ganar en Galicia (y van cinco seguidas) por mayoría absoluta.

Desde que los politólogos secuestraron el debate público con sus tautologías adornadas y su jerga vacía, cuesta mucho encontrar a gente que diga lo evidente. Lo voy a intentar: el PP perderá su mayoría absoluta en Galicia cuando los gallegos dejen de votarlo (aplausos). Y eso sólo puede ocurrir si los votantes del PP mueren, se quedan en casa o votan a otro partido (más aplausos). Contra la muerte no me atrevo a teorizar, pero es evidente que el PSdG ha hecho todo lo posible para que los votantes del PP temieran quedarse en casa, y no digamos cederle su voto. El drama de la izquierda en Galicia no es que el PP siga ilusionando a sus votantes, sino que muchos votantes desilusionados seguirán votando al PP por falta de alternativas.

En el momento en que el PSdG se presentó como muleta del nacionalismo gallego dejó de ser una alternativa de gobierno al Partido Popular. Muchos votantes, no sólo en Galicia, desearían que frente al PP existiera una alternativa nacional, y no sólo una alternativa nacionalista.

«¿No ven que muchos votantes buscan una alternancia de políticas, pero no una alternancia de sistema?»

¿No entiende el PSdG que es posible articular una oferta progresista sin arrodillarse ante el delirio identitario? ¿No ven que muchos votantes buscan una alternancia de políticas, pero no una alternancia de sistema? ¿Que los vecinos de Pontevedra quieren seguir llamando conciudadanos a sus vecinos de Cáceres, San Sebastián o Barcelona? ¿Es el PSdG incapaz de asumir que la mayoría de los gallegos quieren serlo sin por ello dejar de ser españoles?

Estas semanas se ha repetido mil veces la siguiente máxima: «El BNG es una fuerza más atenta a las cuestiones sociales que a la independencia». Un mantra tan absurdo que sólo se le puede ocurrir a un politólogo. No es nada nuevo: se lo hemos oído decir también sobre Bildu y Esquerra (aunque, curiosamente, nunca se lo hemos oído a Bildu o Esquerra). Lo repiten quienes se sienten obligados a justificar los pactos - ahora simbiosis- del PSOE con el nacionalismo. Afortunadamente, el gallego de su escalera es más perspicaz y menos servil que quienes divulgan estas sandeces.

Todo español que haya mirado de reojo Cataluña durante las últimas dos décadas sabe que el nacionalismo es decadencia y discordia. Una rémora para el desarrollo y un veneno para la convivencia. En su asociación con el nacionalismo, el PSOE coloca a los votantes ante una disyuntiva diabólica: no eligen entre izquierda y derecha, sino entre proyecto constitucional o proceso destituyente. Y para muchos ciudadanos el respeto al marco constitucional no es un eje ideológico, sino un pilar del sistema democrático. Para volver a ser alternativa al PP, el PSOE debe distanciarse de la tentación destituyente. Su supervivencia depende de ello. Claro que la supervivencia de Pedro Sánchez depende de lo contrario.

Opinión

El periodismo fue por delante, ahora toca que se haga justicia

«Cuidado con tragarse la milonga de que Koldo García actuaba en solitario y a espaldas de Ábalos. Ambos son uña y carne, una sociedad indisoluble»



Ilustración de Alejandra Svriz.



Álvaro Nieto

@alvaronieto
director@theobjective.com

🕒 Publicado: 21/02/2024

La labor del periodista es a menudo muy ingrata. Si eres de los que intentas anticipar noticias y destapar escándalos, te suele tocar aguantar el chaparrón mientras se acaba por confirmar todo lo que has publicado. Los afectados por tus informaciones cargan contra ti de forma inmisericorde y algunos periodistas de la competencia, en parte por pura envidia y en parte por ser palmeros de

aquellos, minusvaloran las exclusivas y tratan de desprestigiarte. Pero la verdad siempre se acaba abriendo paso, y en el caso de José Luis Ábalos y Koldo García estamos ante un ejemplo magnífico de ello.

Quienes me hayan seguido durante los últimos años sabrán que desde 2020 he dado el coñazo muchísimo con estos dos personajes. Primero como director de Vozpópuli y luego en THE OBJECTIVE. Tanto que hasta tengo publicado un libro en el que ambos protagonizan la mitad de sus páginas. Su relectura, un día como hoy, tras la detención del asesor del ministro por presunta corrupción, pone los pelos de punta.

Dejando aparte el ‘Delcygate’ y la vida disoluta de ambos, lo que está investigando la Fiscalía Anticorrupción nace el 20 de marzo de 2020. Ese día, apenas una semana después de decretarse el estado de alarma por la covid, el Ministerio de Transportes, dirigido por Ábalos, asume la compra centralizada de mascarillas por parte de todo el Gobierno, arrebatando esa función a Sanidad.

Desde ese día, Ábalos es amo y señor de todas las compras del Ejecutivo, que se hacen sin concurso público y mediante adjudicación a dedo con la excusa de la emergencia sanitaria. Y el escándalo estalla el 14 de abril, cuando en Vozpópuli destapamos un contrato muy sospechoso: 8

millones de euros a la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una sociedad limitada con base en un pisito de Zaragoza, sin ninguna experiencia importando material de China y sin apenas actividad conocida los tres años anteriores.

En total, el Gobierno de España adjudicó a esa empresa tres contratos por valor de 40,5 millones de euros, dos dependientes directamente del ministerio de Ábalos y uno del Ministerio del Interior, si bien Marlaska llegó a reconocer en una respuesta parlamentaria que contrató con Soluciones de Gestión tras una llamada del primero. Después hubo nuevas adjudicaciones por parte de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, y siempre con la sospechosa mano de Ábalos por detrás. Todo ello es lo que hoy se está investigando en la Audiencia Nacional.

«Hemos estado muy solos durante demasiados años, pero afortunadamente el tiempo siempre acaba poniendo a cada uno en su lugar»

Por supuesto, hay que dejar trabajar a la Justicia y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Sin embargo, cuidado con tragarse la milonga de que Koldo García actuaba en solitario y a

espaldas de Ábalos. Ambos son uña y carne, una sociedad indisoluble. Podría dar mil ejemplos sobre ello, pero me limitaré a recordar cómo el ministro enchufó como asesor en el ministerio a García sin tener ninguna cualificación, cómo lo colocó de consejero de Renfe Mercancías, cómo contrató a su mujer (también detenida) como ayudante de secretaria, cómo Koldo pagaba con billetes de 500 euros las juergas del ministro, cómo se fueron juntos a visitar 11 países (entre ellos República Dominicana y Guinea Ecuatorial) nada más salir del Gobierno Ábalos...

Mi homenaje desde aquí a los periodistas valientes a los que he tenido la oportunidad de dirigir en los últimos años y que son los auténticos héroes de esta historia: Alberto Sierra, Antonio Rodríguez, Ketty Garat, Alberto Sanz, Gonzalo Araluce... Hemos estado muy solos durante demasiados años, pero afortunadamente el tiempo siempre acaba poniendo a cada uno en su lugar.

Opinión

Sánchez es el auténtico récordman de la deuda

«Ni con González, ni con Aznar, ni con Rajoy, ni siquiera con Zapatero nuestra deuda creció casi 400.000 millones de euros en solo cinco años y medio»



Ilustración de Alejandra Svriz.



Ignacio Ruiz-Jarabo

@i_ruiz_jarabo

🕒 Publicado: 21/02/2024

Estimado lector, piense por un momento en un familiar suyo que por estar fuertemente endeudado tuviera que afrontar el pago de unos elevados intereses y decidiera resolverlo endeudándose aún más. Piense también en una empresa que, acuciada por los gastos financieros de un balance excesivamente apalancado, decidiera resolver su problema aumentando su nivel de endeudamiento. En ambos casos, esta conducta del deudor consistente en

pagar la carga de la deuda asumiendo una deuda mayor sería objeto de crítica y desde luego, ningún analista de riesgo de ningún banco acreedor la daría por buena. Así sería, pues nada es más irresponsable que empujar hacia abajo la bola de nieve de tu deuda pues ésta, agrandándose progresivamente en la caída, acabará estrellada y estrellando al deudor.

Lamentablemente para todos los españoles, la deuda pública española es la bola de nieve que Sánchez está empujando cuesta abajo y que no para de crecer, entre 70.000 y 80.000 millones de euros anuales desde que gobierna, salvo la excepción de 2020 —año del shock pandémico— en el que aumentó casi en 160.000 millones de euros en un solo ejercicio. Es ya tan grande la bola que a España le pasa como al familiar y a la empresa utilizadas como referencia y no puede pagar los intereses de lo adeudado por lo que recurre a endeudarse más para pagarlos. Así ha sucedido en los años precedentes y así ha vuelto a suceder en 2023. En este ejercicio España debía afrontar unos gastos financieros ligeramente superiores a 30.000 millones de euros y para poder pagarlos no solo aumentado nuestro endeudamiento para pagarlos, sino que nuestra deuda ha crecido en 72.000, más del doble de los intereses a pagar. Un auténtico crack financiero, un crack de libro.

Pese a ello, y en el curso de la campaña electoral gallega, Sánchez ha celebrado alborozadamente, y con un descaro que torna ya en irresponsabilidad, que el Gobierno haya sido capaz de «reducir» la deuda pública en relación con el PIB. Presidente sea por una vez serio si es capaz de serlo. En 2023 la deuda pública ha aumentado en los referidos 72.000 millones de euros, poca broma, lo que implica que su aumento durante el ejercicio haya sido un 5%, desde 1.502 hasta 1.574 billones de euros en ambos casos. Y si quiere usted relativizar este aumento, debe considerar que en términos reales —no monetarios— también ha crecido dado que la inflación ha sido del 3,1%. Y si la medimos per cápita, dado que el aumento de la población en 2023 se limitó al 1%, resulta que también ha crecido la deuda que corresponde a cada residente español. Eligiera Sánchez la opción que quisiera —euros corrientes, euros constantes, euros por residente— es evidente que al término de 2023 España debe más que al finalizar 2022.

«El maquillaje y la manipulación de las estadísticas económicas y laborales es seña de identidad de este Gobierno»

Hete aquí que entonces Sánchez tiró de la alquimia y de sus alquimistas y se atrevió a presumir de haber reducido en 2023 la proporción entre deuda y PIB. Haciéndolo así obvió de manera malintencionada que la utilidad y la función de esta ratio se constriñe casi exclusivamente a la realización de comparaciones internacionales, no susceptibles de hacerse de otro modo dada la heterogeneidad que presentan los diversos países en otras magnitudes. Sabido es que el maquillaje y la manipulación de las estadísticas económicas y laborales es seña de identidad de este Gobierno y el caso comentado es una nueva demostración. Debió pensar que declarando que la deuda había disminuido en relación con el PIB, podría pasar desapercibido que en realidad había aumentado y además mucho, demasiado. Sánchez, no ha colado, esta vez tampoco nos has engañado. Por cierto, a la vista de los resultados habidos en Galicia, cada vez son menos los que se dejan engañar por Sánchez.

Aclarado que, pese a su intención de hacerlo, Sánchez no ha conseguido engañar a todos sobre cual es la dimensión y la evolución del endeudamiento que provoca su política económica, es inevitable subrayar que ésta está arruinando el presente y el futuro económico de España. Ya advertían antaño los hacendistas clásicos del efecto perverso que para la economía de un país tiene un endeudamiento excesivo del Estado. Ya lo señala hogaño la Unión

Europea que tiene fijado en el 60% del PIB el límite máximo de la deuda pública de sus países miembros, umbral que España casi duplica —estamos en el 107%—. Por lo que se ve, para Sánchez unos y otros deben formar parte de lo que él ha dado ahora en denominar «fachosfera», un supuesto nuevo ingenio de la factoría ideológica de La Moncloa, ese numerosísimo ejército de ignorantes bienpagados que alimentan su estómago a costa de nuestros impuestos.

Lo incontestable es que, tic-tac, desde que Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno el reloj de la deuda pública de España marca una hora cada vez más elevada. Él es el dirigente que ha alcanzado un mayor nivel de deuda pública de nuestra historia. Es también el que ha conseguido que, a igual periodo de tiempo, nuestro endeudamiento haya crecido más. Ni con Felipe González, ni con José María Aznar, ni con Mariano Rajoy, ni siquiera con Zapatero —que ya es decir— nuestra deuda creció casi 400.000 millones de euros en solo cinco años y medio. Esa marca le corresponde solo y en exclusiva a Sánchez, el auténtico récordman de la deuda pública española, algo por lo que algún día habremos de pasarle la correspondiente factura, nosotros y nuestros hijos. Que encima se atreva a presumir de haberla reducido en proporción al PIB resulta de juzgado de guardia, un establecimiento donde quizás algún día tenga que rendir cuentas acompañado de un abogado.

Opinión

Malas noticias desde Galicia

«Vamos hacia una concepción plurinacional del país que convierte la política en una convención de particularistas dedicados al desguace del Estado democrático»

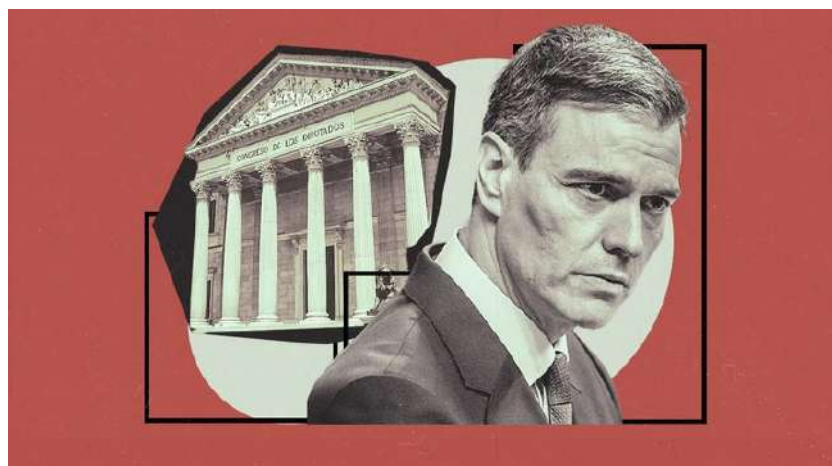


Ilustración de Alejandra Svriz.



Manuel Arias Maldonado

@goncharev

🕒 Publicado: 21/02/2024

Nada más natural que la alegría con la que tantos han saludado el resultado de las elecciones gallegas: el temor a una victoria del bloque plurinacional había dominado los últimos días de campaña, sacudida por los habituales errores del PP cuando se aproxima a la foto finish. Pero solo ha sucedido lo que viene sucediendo de manera casi invariable desde hace décadas y los conservadores han revalidado su mayoría absoluta. Que eso pueda

considerarse una noticia sensacional no deja de ser sorprendente; porque las noticias son otras. Y no son buenas, aunque podrían haber sido peores.

Si bien se mira, la verdadera noticia es que una candidata que se jacta de haber abandonado el español cuando cumplió veinte años ha obtenido más de un tercio de los votos, colocando a su partido —el nacionalista BNG— como líder de la oposición. Su progresión en las urnas gallegas se corresponde con la regresión del socialismo gallego, que ha encontrado en la subalternidad al nacionalismo una nueva identidad partidista bajo el liderazgo de Sánchez, así como con la cuasi desaparición de Sumar —menos mal que Yolanda Díaz es gallega— y Podemos.

Por su parte, la fragmentación particularista tiene su guinda en el excéntrico diputado de Democracia Ourensana, que lleva al parlamento gallego la lógica de gobierno desarrollada por el PSOE de Sánchez en Madrid: conviértete en minoría territorial indispensable para la conformación de una mayoría parlamentaria y pide por esa boquita. Dado que Rueda disfrutará de una cómoda mayoría absoluta, el modelo resulta de momento inaplicable. Pero la sola presencia de un diputado provincial en un parlamento autonómico confirma el auge de la representación territorial —por encima de la ideológica o la de intereses— en la democracia española.

Desde ese punto de vista, no puede decirse que las elecciones gallegas hayan «derribado» el muro levantado por la praxis política de Pedro Sánchez. Lo que ha pasado es otra cosa: han ganado los del otro lado. Se trata de una victoria relevante; como ha escrito Cristina Losada, un gobierno liderado por el BNG hubiera puesto todo su empeño en sacar a España de Galicia. Y lo hubiera hecho mediante la aplicación de una política nacionalizadora que nada habría tenido que ver con el galleguismo practicado por los gobiernos populares. Este último es un regionalismo con lengua propia; lo que puede hacer un nacionalismo etnicista con esa herramienta lo tenemos ya más que sabido.

«El debilitamiento del PSOE como partido de gobierno de vocación nacional es una pésima noticia para el futuro de la democracia»

Sucede que el debilitamiento del PSOE como partido de gobierno de vocación nacional es una pésima noticia para el futuro de la democracia española. De ahí que la novedad esté en lo que ha sucedido del lado socialista del muro: aunque los socialistas solo obtuvieron 14 escaños en 2016 y 2020, se han quedado ahora en apenas nueve; mientras tanto, el BNG pasa

de los seis diputados de 2016 —año de mareas altas— a los 25 de ahora mismo. Uno puede consolarse diciendo que los votantes del bloque son jóvenes preocupados por los problemas sociales, pero se ve que solo quieren resolverlos en gallego: ya es casualidad.

Cabe suponer que el BNG tendrá una mayor presencia en el parlamento nacional cuando lleguen las próximas elecciones generales, aunque no hay certeza al respecto; el famoso voto dual podría evitarlo. Tampoco sabemos cuánto puede todavía reducirse el número de diputados que el PSOE aporta al bloque plurinacional que Sánchez se ha sacado de la manga para llegar al poder, laminando por el camino la fuerza territorial de su partido. El problema reside en la herencia que se va preparando: una concepción plurinacional del país que va calando entre amplios sectores del electorado —ya es casi una cultura— y convierte la política nacional en una convención de particularistas dedicados al desguace del Estado democrático. Esa tendencia se ha agudizado en Galicia, aunque pueda parecer lo contrario. Y es el principal problema al que se enfrenta la democracia española en el largo plazo: uno que no podrá resolverse mientras el segundo partido nacional siga empeñado en borrar letras de sus siglas.

Opinión

Mascarillas, caos y chorizos

«Cuatro años después del ‘Salimos más fuertes’ afloran las evidencias de que un tal Koldo, mano derecha del exministro socialista Ábalos, se lo llevó crudo»



Ilustración de Alejandra Svriz.



Javier Benegas
@Benegasj

🕒 Publicado: 23/02/2024

Navegando por las procelosas aguas de la Administración en busca de cifras me he agendado el gasto sanitario total declarado por el Ministerio de Sanidad en el Sistema de Cuentas de Salud a propósito de la pandemia: 17.283 millones de euros. Esta cifra es la suma de los 8.914 millones gastados en 2020 y los 8.369 en 2021. Sin embargo, no es el verdadero total porque falta añadir el gasto en pruebas y seguimiento de contactos. Epígrafe crucial que la Administración no puede o no quiere facilitar.

Tampoco es tarea fácil averiguar qué cantidad de ese dinero fue adjudicado por la vía de urgencia sin publicidad ni concurso, es decir a dedo. Y en su caso, cuántos contratos estarían aún por justificar. Porque todavía hay bastante adjudicaciones pendientes de justificar el carácter de urgencia que en su momento permitió a los responsables políticos volar por debajo del radar de los registros concursales. Es en este Mar de los Sargazos administrativo que habría navegado el presunto velero corsario Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, S.L. para hacerse con un botín de bastantes millones de euros.

Hemos tenido que esperar bastante para que la campaña «Salimos más fuertes» cobre al fin algún sentido, porque como todos sabíamos entonces y sabemos ahora no salimos más fuertes sino bastante debilitados. Y es que el eslogan triunfal llevaba implícita una elipsis: «[Algunos] Salimos más fuertes». O una elipsis y un eufemismo: «[Algunos] Salimos más [ricos]».

Es seguro que el corsario Koldo y el almirante Ábalos harán correr ríos de tinta en los próximos días, semanas, meses... y seguramente años, porque el sistema judicial es alarmantemente lento. Mucho más lento que los veloces veleros con patente de corso que aprovechan una epidemia, un separatismo o un cambio climático para piratearnos y escabullirse entre tinieblas, llevados por el viento de las buenas intenciones.

450.000 vidas aseguró haber salvado el Gran Capitán Sánchez durante el temporal de la pandemia gracias a su proverbial estado de alarma. Esa medida excepcional que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Pero, ¿qué importaba esta sentencia si no acarreaba ninguna consecuencia, ni legal ni política? ¿Acaso la gente no se asomaba a las ventanas y balcones para aplaudir y celebrar la privación de libertad decretada por el Gran Capitán?

«Nuestro país es uno de los pocos que apenas ha cuestionado el descomunal gasto y las restricciones impusieron durante la pandemia»

Cuatro años después del «Salimos más fuertes» afloran las evidencias de que un tal Koldo, mano derecha del exministro socialista Ábalos, se lo llevó crudo vendiendo mascarillas a la Administración; por ahora y que se sepa, 55 millones de euros. Pero recuerde, querido lector, la cifra que le facilitaba al principio sobre el gasto que nuestros políticos dedicaron a la Covid entre 2020 y 2021: 17.283 millones de euros. Y recuerde también que a esta cantidad aún faltaría por sumar una buena pila de millones que las administraciones se niegan a revelar.

Piense en todo ese dinero gastado en buena parte por la vía de urgencia sin supervisión ni control. Y ahora pregúntese porque nuestro país es uno de los pocos, más allá de las repúblicas bananeras, que apenas ha cuestionado el descomunal gasto y las restricciones que los políticos—no sólo socialistas— impusieron durante la pandemia, muchas de ellas absurdas, contraproducentes, arbitrarias e ilegales.

En diciembre de 2023, el ex primer ministro británico Boris Johnson tuvo que declarar ante la comisión que investigaba la gestión de la pandemia del Gobierno británico. En su comparecencia Johnson pidió perdón a las familias de las víctimas y reconoció que podría haberlo hecho mejor. El exlíder conservador fue acusado de dejar morir a los ancianos, de incompetencia y caos. Circunstancia de la que se hicieron eco muy especialmente nuestros medios más progresistas, aunque no faltó tampoco el entusiasmo de la prensa reconvertida a socioliberal, antes llamada de derechas. Al fin y al cabo, el villano era un conservador.

Un año antes, en Suecia, la denominada Comisión Corona culminaba su exhaustiva investigación sobre la gestión de la epidemia en el país nórdico. Fue el propio Ejecutivo sueco quien en 2020 puso en marcha esta comisión independiente que dos años más tarde emitió un acerado dictamen... contra el Gobierno europeo que, como demuestran

los datos, mejor gestionó la crisis sanitaria. Sin embargo, el objetivo de la comisión no era hacer escarnio, sino extraer conclusiones valiosas en previsión de que algo semejante volviera a suceder.

«Prensa y la ciudadana se han desentendido de la rendición de cuentas en la gestión de una crisis que costó más 120.000 vidas»

En España, en octubre de 2020 el Ministerio de Sanidad anunció su intención de elaborar un informe de evaluación independiente de su gestión de la pandemia. Los plazos previstos inicialmente se incumplieron generosamente, hasta el punto de que se llegó a especular que, tal y como sucedió con el famoso comité de expertos que supuestamente asesoró al Gobierno durante la pandemia, esta comisión se desvanecería como el humo. Esta vez no fue así.

El estudio y sus conclusiones se publicaron a finales de 2023. Las razones del retraso fueron dos. La primera, que quienes se encargaron de realizarlo lo tuvieron que hacer gratia et amore y sin apenas recursos. La segunda, que su publicación se retrasó intencionadamente. El estudio concluyó en abril de 2023, pero la celebración de las elecciones autonómicas en mayo de ese mismo año «desaconsejó» su publicación. Después ocurrió lo mismo con el adelanto de las generales en julio.

El Gobierno y la oposición no tenían mucha prisa en que se conocieran las demoledoras conclusiones de ese estudio porque afectaban tanto al gobierno central como a los autonómicos. Tampoco parecieron querer darle demasiada publicidad una vez que se publicó. De hecho, mucha gente no sabe ni que existe. No es de extrañar porque la fecha escogida para hacerlo público fue el 21 de diciembre, casi en plena Navidad.

¿Ha habido algún revuelo por este pacto de silencio? En absoluto. No, ya la prensa y la ciudadanía se han desentendido de la rendición de cuentas en la gestión de una crisis que costó más 120.000 vidas y 63.000 millones de euros hasta 2023, es que la propia oposición parece sentirse aliviada por esta dejadez.

«Cada día que pasa se hace más evidente que a la sombra del sanchismo florecen con vigor no ya sinvergüenzas, sino ministros siniestros»

Ocurre que aquí ningún político tiene la conciencia tranquila, aunque algunos se lleven la palma. Son demasiadas las mascarillas que se compraron a precio de oro por la vía de urgencia, demasiados millones fluyendo sin control a cuenta de la covid no sólo desde los ministerios, también

desde las consejerías de las comunidades autónomas. Me pregunto si esto no tendrá algo que ver con el empeño casi unívoco en que fuéramos embozados hasta, como aquel que dice, hace dos días.

No quiero relativizar la trascendencia del caso Koldo-Ábalos y descargar al Gobierno socialista de sus gravísimas implicaciones. Cada día que pasa se hace más evidente que a la sombra del sanchismo florecen con vigor no ya chorizos y sinvergüenzas, sino ministros siniestros cuyo aspecto es —ya no hay duda— el espejo del alma. Ojalá este escándalo, en cuya revelación lleva bastante mérito Álvaro Nieto, director de esta misma cabecera, sirva para acelerar la liquidación por derribo del, hasta ahora, peor Gobierno de nuestra historia.

Sin embargo, debemos encender las luces largas y contemplar estos escándalos no sólo a la luz partidista, sino como pinceladas que componen un lienzo tenebrista. El retrato de un país donde los políticos nos han perdido el respeto y donde, por ejemplo, el ministro de Transportes puede decir sin rubor que debemos ir acostumbrándonos a que los trenes se incendien porque, de hecho, ya hemos tragado con cosas mucho peores, como la muerte de más de 120.000 compatriotas, familiares y amigos en medio de una incompetencia inaudita. Toda una tragedia con la que, en el colmo de la depravación, los hijos de puta se han enriquecido. Sería, pues, justicia poética que al final Sánchez cayera por culpa de la covid.